

## Cuestiones de sociología, economía y política.

### U3

Unidad 3 Crisis y transformación En La Sociedad Argentina.  
Sus Consecuencias.

#### Índice de Autores y temas de la Unidad 3 (Por orden de presentación)

- Miguel Angel Ferraro : " El capitalismo y su etapas históricas"
- Miguel Angel Ferraro: Introducción a "Clases dominantes y crisis política en la argentina actual" de Juan Carlos Portantiero.
- Juan Carlos Portantiero: "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual"
- Miguel Angel Ferraro: " Resolución del Empate Hegemónico"
- Perry Anderson : Democracia y dictadura en América latina en la década del '70
- Rodolfo Walsh:"Carta a las Juntas" , 24 de marzo de 1977.
- Solicitada de ADEBA, 24 de marzo de 1977.

#### OBJETIVOS PARTICULARES

Permitir la **comprensión** de los **cambios sufridos** por la **estructura social** Argentina teniendo en cuenta los ejes de inclusión y exclusión social, homogeneidad y heterogeneidad. Se tomará en cuenta para el análisis la transformación que tuvo el país en las últimas décadas.

## CONTENIDO

Origen histórico de la sociología clásica. Principales problemas y condiciones que la hacen posible. Corrientes de pensamiento, sus presupuestos y principales conceptos.

U3

## Tema 1 El capitalismo y sus etapas históricas

Por Miguel Angel Ferraro

Colaboraron Noemí Vidal y en la corrección Sofía Saulesleja

“...asistimos a una transición entre grandes etapas históricas y, en consecuencia, está surgiendo frente a nosotros una sociedad que aún cuando sus principios constitutivos básicos la identifican como capitalistas, presenta rasgos centrales de organización sustancialmente diferentes de los que caracterizaban la etapa que estamos abandonando.”

*Aldo Isuani*

Podemos caracterizar al **capitalismo** como al **sistema económico, social y político que como modo de producción, sucede históricamente al feudalismo**. El capitalismo ha conocido diferentes fases teniendo en cuenta los cambios que se produjeron en la economía, en la política, en lo social y lo cultural.

Surgido en Europa en el siglo XVI lo que se denominó como el capitalismo mercantil, se acrecienta

con la incorporación de la maquinaria al proceso de producción a fines del siglo XVIII (capitalismo industrial) y se extiende desde fines del siglo XIX (capitalismo financiero) bajo la forma de colonialismo e imperialismo para culminar con las multinacionales.

A través de crisis y modificaciones que se han ido produciendo en el capitalismo, algunos aspectos permanecen:

- el **provecho o beneficio personal** como motor de la vida colectiva,
- la vigencia preponderante de la **propiedad privada** de los medios de producción,
- la **primacía del capital sobre el trabajo** que se ve reflejado desde una visión marxista a través de la explotación del trabajador asalariado mediante la extracción de la plusvalía.

➔ En su **aspecto ideológico** está íntimamente vinculado al **liberalismo**. Parte de una concepción individualista según la cual el funcionamiento de la economía se basa en el interés particular, fundado en el principio de la libre empresa en lo económico y la libre competencia en general (libertad de comercio, libertad de contratación).

Nos interesa mostrar a través de comparaciones y diferencias la característica principal de las diferentes fases del capitalismo, es decir lo que denominaremos **Liberalismo**, **keynesianismo** y **Neoliberalismo**, definiendo, más tarde, los rasgos universales del modelo en proceso de desarrollo y su relación con la Argentina.

## 1.1 Liberalismo y Keynesianismo



El **modelo liberal** tiene sus orígenes a comienzos del siglo XIX, etapa histórica que sucede al **absolutismo monárquico**, que se consolida cuando se constituye el último factor para definir la sociedad capitalista: **la construcción de un mercado de trabajo libre**.

En este aspecto, **Inglaterra** fue una precursora, ya que fue la primera en instalar un poder basado en la **monarquía parlamentaria** sostenida por una fuerte clase burguesa, permitiendo desarrollar el capital y las industrias; además de ser la cuna de la revolución industrial.

Una vez madura la revolución industrial, se completa el proceso con la retirada del Estado del terreno de la producción y la distribución, que da como resultado un mercado libre autorregulado. Estos factores dieron un nuevo sello al comportamiento cíclico de la economía capitalista.

*“La existencia de los ciclos económicos en un contexto de mercado de trabajo libre operó como eficaz instrumento para disciplinar a la fuerza de trabajo. La fase recesiva del ciclo asociada al desempleo generó el miedo de perder el trabajo y debilitó el poder de negociación de los trabajadores permitiendo un funcionamiento eficaz del ejército de reserva(1) ”*  
(Isuani, 21).

*(1) Según el concepto de Marx y Engels, la porción de la fuerza de trabajo que no es utilizada cumple la función de presionar sobre el nivel de salario de los activos y sobre el poder de negociación de los sindicatos.*

*“La ley que mantiene constantemente el exceso relativo de población o ejército industrial de reserva en equilibrio con el volumen y la energía de la acumulación del capital, ata al obrero al capital con ligaduras más fuertes que las cuñas con que Vulcano clavó a Prometeo a la roca. Esto origina que a la acumulación del capital corresponda una acumulación igual de miseria. La acumulación de la riqueza en uno de los polos determina en el polo contrario, en el polo de la clase que produce su propio producto como capital,*

*una acumulación igual de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de ignorancia, de embrutecimiento y de degradación moral”*  
(Marx, “El Capital”, t. I, cap. XXIII)

En el **modelo liberal** el trabajador, para sobrevivir, debe vender su fuerza de trabajo. De esta manera se abandona la concepción de la responsabilidad del señor feudal sobre el bienestar del siervo.

El mecanismo para que todo aquel que estuviese en condiciones de sobrevivir a través de la inserción en el mercado de trabajo lo haga, fue castigar la mendicidad y la vagancia. La ayuda estatal sólo venía mediante instituciones de beneficencia, para aquellos que no estuvieran capacitados para integrarse en el mercado laboral. Pero sus aportes eran tan magros de manera que no fuera tentador dejar de trabajar.

Los **procesos de urbanización e industrialización** generaron una ejercitación en la conformación de acciones colectivas en el movimiento obrero. Estas acciones están marcadas por tres etapas:

- ◆ Primero se dan en forma de **asociaciones mutuales**, sostenida por la colaboración solidaria de los propios trabajadores. Los fondos recaudados se utilizaban para la ayuda de trabajadores enfermos o inválidos y a las familias de los trabajadores que fallecían.
- ◆ El segundo están las **organizaciones de trabajadores**, ya no sólo eran organizaciones de ayuda mutua, sino también de defensa y conquista de beneficios laborales. Asumían iniciativas para demandar y obtener, por medio de negociación o conflicto, mejoras salariales, reducción de las horas de trabajo o mejoras en las condiciones de trabajo.
- ◆ En tercer lugar y *“Finalmente, la fuerza de trabajo dio origen a centrales sindicales y partidos políticos que intentaban generar un cambio profundo, generalmente revolucionario, del orden social prevalente. Organizaciones como las diversas centrales sindicales anarquistas, anarcosindicalistas (...) anunciaban desde finales del siglo pasado que (...) los trabajadores se convertirían en un actor con pretensiones de*

*intervenir en el dictado de las reglas de juego de la organización socio-productiva.” (Isuani, 22).*

 Este proceso **generó la figura de la seguridad social** como elemento mediador para prevenir el orden y evitar el conflicto social. Introducida como instrumento de negociación para desradicalizar el conflicto social, implantó la noción del derecho al beneficio por mérito de la contribución realizada para financiarlo.

La incorporación de la figura de la seguridad social deja ver que la figura de la fuerza de trabajo ha adquirido una importancia política imposible de ignorar. A pesar de los recurrentes períodos de recesión y desempleo, que debían actuar como instrumentos disciplinadores, la acción colectiva y el conflicto protagonizado por las organizaciones que los representaban se desplegaban con un contenido antiestatal y revolucionario.

La gran depresión marca el hito con el cual termina de desmoronarse el modelo liberal, como estructura económica del sistema capitalista.

 El **modelo keynesiano** se instala en el sistema capitalista en el período inmediatamente posterior a **La Gran Depresión y logró vigencia en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial.**

Este período que toma las ideas de el inglés **John Maynard Keynes**, que constituyó una reformulación del liberalismo mediante el intervencionismo estatal. En mayor o menor medida inspiró la política de muchos gobiernos occidentales después de la crisis de 1929.

En el pensamiento de **Keynes** se destacan tres aspectos sobresalientes: **sus teorías del empleo, del interés y de los salarios.**

Según **Keynes**, “el capitalismo asiste cíclicamente a crisis de consumo; en definitiva la capacidad de producción de la sociedad capitalista va periódicamente más allá de la capacidad de consumir de la población, hecho central para explicar las recesiones o depresiones económicas”.

*(Isuani, 23)*

“Si pudiera acudirse a mecanismos que lograran mantener constante la demanda efectiva de la población, el ciclo económico no exhibiría sus pronunciados picos y se evitaría así la destrucción de capital que se operaba en cada momento de baja del ciclo y seguramente también el conflicto social que ésta generaba. Como los trabajadores tienen una mayor propensión al consumo que al ahorro, a diferencia de los empresarios que pueden disponer una mayor proporción de sus ingresos para el ahorro y la inversión, una acción del Estado tendiente a estimular el consumo de los primeros tendría seguramente un efecto benéfico sobre el comportamiento de la economía. Los capitalistas tendrían, frente al estímulo de demanda, una respuesta positiva en términos de actividades productivas, en definitiva, traería aparejadas mayores ganancias”.

*(Isuani)*

Las medidas que se tomaron para que esto sucediera, fueron fomentar el mayor consumo de los trabajadores para que se acrecentara la producción y las ganancias de los empresarios. **Para esto, el keynesianismo, institucionaliza la intervención Estatal en la economía y el pleno empleo.** Estos dos elementos fueron la piedra angular del **Estado de Bienestar.**

Las herramientas que utilizó el Estado para moderar las oscilaciones del ciclo económico se pueden resumir en: **política financiera, crediticia, arancelaria, impositiva.** Además de involucrarse en **sociedades de producción de bienes y servicios.**

Para la institucionalización del pleno empleo, el estado adoptó **medidas legislativas** que impedían el despido del sector privado. Además, de la generación de puestos de trabajo en el sector público.

Los cambios en las políticas sociales se pueden observar en la adopción de las instituciones bismarkianas como los **sistemas jubilatorios, seguros de salud o esquemas de compensación por accidentes de trabajo**. Estos beneficios estaban sustentados por impuestos generales, para que pudieran tener alcance a toda la ciudadanía.

Estas políticas traen aparejado un cambio en la actitud de los grandes actores sociales. Los trabajadores abandonan su pasado revolucionario, reconociendo los parámetros de la sociedad capitalista. De esta manera adquirieron el reconocimiento de las centrales sindicales y un aumento de salario. A estos avances en los derechos sociales se les sumó la expansión democrática.

 Los instrumentos aportados por Keynes dieron un espectacular **crecimiento de la producción y la productividad, en un contexto de baja inflación y desempleo**. Se había logrado domesticar al ciclo económico. **Keynes** reinaba en occidente y su inspiración no sólo resolvía problemas del crecimiento sino también los relativos al orden social.

Podemos asociar el Estado de Bienestar en América Latina con los dos mandatos de **Juan Domingo Perón**, en la Argentina. Dicho gobierno se extendió desde mediados de los años '40 hasta mediados de los '50, producto de un proceso que se venía gestando desde la década anterior en nuestro país.

El gobierno de Perón **fortaleció la intervención estatal** a través de una política verticalista y apoyada en el consenso entre las masas y las altas cúpulas de la industria nacional, la Iglesia y parte de las fuerzas armadas.

La institucionalización del pleno empleo se pudo lograr con el fortalecimiento de la industria pesada en los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, principalmente; desplazando al agro a un segundo plano. **Se nacionalizaron muchas empresas** que estaban en manos de capitales privados, el ejemplo más claro fue la nacionalización de los ferrocarriles. A los trenes se le sumaron los teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de electricidad del interior del país. La reforma más importante fue la **nacionalización del Banco Central**, desde donde se manejaba la política monetaria y crediticia y el comercio exterior.

La nacionalización de la economía y su control por el Estado fueron una de las claves de la nueva política económica. El mantenimiento del empleo y la elevación del nivel de vida tuvieron una importante raíz política.

Por la vía de las negociaciones colectivas, garantizadas por la ley, los salarios empezaron a subir notablemente. A ellos se le agregaron las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o los sistemas sociales de medicina y turismo, actividades en las que los sindicatos tuvieron un importante papel. El **Estado benefactor** contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida, mediante el congelamiento de los alquileres, el establecimiento de salarios mínimos y de precios máximos, mejoras de la salud pública, planes de vivienda, construcción de escuelas y colegios, organización del sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social.

---

## 1.2 Neoliberalismo

---

*“Hacia comienzos de la década del setenta, y en especial a partir de la crisis del petróleo de 1973, la economía occidental inspirada por el keynesianismo comenzó a exhibir problemas tales como caídas en la producción y la productividad y aumentos en la inflación y el desempleo. Aún más, emergía un fenómeno desconocido, una combinación entre estancamiento e inflación que fue bautizada como stagflation... Y en verdad se trataba de un nuevo fenómeno, ya que en la etapa del liberalismo, la inflación estaba asociada a momentos de auge del ciclo económico y no de recesión, cuya compañera solía ser la deflación”*

*(Isuani, 21).*

Ya hacia **comienzos de los años ochenta** los analistas pudieron ver que la crisis que afrontaba el modelo keynesiano no era circunstancial, sino una crisis de mayor profundidad y afectaba las entrañas del modelo de desarrollo. Una de las causas más importantes por la cual se da la **caída del Estado de Bienestar** es por el creciente poder adquirido por las clases subordinadas. Este poder fomentado por el pleno empleo, erosionaba el papel que en el pasado desempeñaban la

recesión y el desempleo como instrumento disciplinador. **A diferencia del la Gran Depresión de 1929, que fue una crisis de consumo, en los setenta se dio una crisis de acumulación.** El porqué de este cambio era que la inflación había reemplazado a la recesión como instrumento de contención de demandas, pero estos grandes picos de inflación terminaban siendo una amenaza para el proceso de acumulación e inversión de capitales en el mercado.

De esta manera ya estaban sentadas las condiciones para que se pudiera implementar un paquete de políticas económicas dirigidas a demoler las bases del modelo keynesiano. Las estrategias de privatización, desregulación y flexibilización laboral cumplían el papel de medicinas curativas a los desórdenes causados por el Estado de Bienestar. Las privatizaciones de empresas estatales reducían la producción de bienes y servicios y la capacidad de generar o mantener puestos de trabajo en el sector público; la desregulación limita la capacidad estatal para intervenir en la economía y la flexibilización laboral ataca el poder de los sindicatos y la rigidez del keynesianismo para los desplazamientos al interior y el exterior del mercado laboral. Esta nueva etapa histórica fue denominada neoliberal, dado que se aproximaba en muchos sentidos al modelo liberal o prekeynesiano.

La **transición entre le modelo keynesiano y el neoliberal** estuvo marcada por tres hechos:

- ◆ El **primero**, la caída del bloque soviético y con él el mundo bipolar, el sistema capitalista no encontrará ninguna resistencia a su desarrollo.
- ◆ El **segundo** hecho está marcado y alentado por la disolución de la bipolaridad política militar, dando la conformación de bloques económicos en competencia y hegemonía de los Estados Unidos, se acelera el fenómeno de la **globalización**, es decir una sociedad global donde las barreras nacionales a la producción y el comercio se resquebrajan rápidamente.
- ◆ Y en **tercer** lugar se produce un desplazamiento del eje dinámico de la actividad productiva. La industria pesada, como la siderurgia o la petroquímica, es desplazada a un segundo plano y se fortalece la producción de bienes que demandan un elevado nivel de conocimientos en su producción. Estas actividades están relacionadas con la robótica, la informática o la biogenética. Este fenómeno produce un fuerte impacto en el mercado laboral:

“Sólo crecientes niveles de calificación y educación hacen posible el acceso a un sistema productivo que desde sus orígenes no cesa de ahorrar fuerzas de trabajo en el acto de producción. Así, el mercado de trabajo se fragmenta, estableciendo cada vez más distancia económica y social entre quienes están en condiciones de acceder a la modernidad y quienes no pueden aspirar a ello.(2)”

Problema que no solo afecta a los países periféricos, sino también a los países llamados del Primer Mundo.

La idea del modelo keynesiano era la de incorporación de todos los sectores de la sociedad al mercado de trabajo, a través del crecimiento económico, generando como consecuencia la cobertura de todas las personas por el seguro social brindado por el Estado. De manera muy diferente, sucede en el modelo neoliberal.

“Antiguos incluidos salen de los márgenes del nuevo sistema productivo y muchos de ellos se tornan pobres estructurales.”

Esta situación provoca una sociedad más heterogénea, pero a la vez un proceso de dualidad entre quienes pueden acceder al mercado de trabajo, y quienes no volverán a poder hacerlo quedando excluidos de los beneficios salariales y laborales que obtenían entrando en el él. La marca de la pertenencia o no descansa fuertemente en el nivel de educación o calificación alcanzado.

En este nuevo período las instituciones de seguro social quedan reducidas al alcance de las personas que logran integrarse al mercado de trabajo. Mientras hay quienes ya no tienen posibilidades de hacerlo hay un crecimiento de las políticas asistenciales para los excluidos. El modelo neoliberal desarticula la faceta redistributiva del Estado keynesiano basada en la noción de universalidad y derecho ciudadano. La educación y la salud públicas van quedando como servicios para los de menos recursos.

“En la nueva etapa aparece otra paradoja: el crecimiento económico, antes antídoto contra el desempleo, se asocia ahora con su aumento”.

El conocimiento opera como mecanismo de entrada al sector moderno de la economía. De esta manera es muy difícil decir que los que quedan fuera del mercado laboral operan como ejército de reserva., ya que no se trata de desempleados esperando la oportunidad de reemplazar a trabajadores, todos sin mayor calificación y por lo tanto intercambiables. Si no se da una situación los empleados y subempleados, sin mayor capacitación, no pueden reemplazar a operarios de alto nivel educativo y quedan confinados a los márgenes del sistema productivo moderno:

**“...no constituyen ya un ejército de reserva sino población excedente. Robert Malthus reemplaza a Carlos Marx.”**

Pero al hablar de población excedente no se refiere a población que no puede ser alimentada, sino a que no puede ser utilizada en el moderno sistema productivo. Esta población podrá garantizarse su alimento a través de ingresos generados en los márgenes de la sociedad o por asistencia estatal o privada, pero no serán relevantes como productores o consumidores de la nueva sociedad.

Los dos mandatos del gobierno de Carlos Menem durante la década de los noventa podemos ubicarlos dentro de modelo neoliberal. En este período se aplicaron todas las recetas enviadas por el FMI y el Banco Mundial, ya que desde mediados de los años setenta la deuda externa se había incrementado y se hacía muy necesario contraer créditos para pagar la deuda se acataban todas las políticas enviadas por estos organismos internacionales.

La **privatización de los servicios públicos, luz, gas, teléfonos, trenes**, etc. acompañado por la **desarticulación de los convenios colectivos de trabajo, la flexibilización laboral** a través de la tercerización del empleo, las rebajas en los sueldos estatales y otras políticas neoliberales marcaron el paisaje de la época.

El **reajuste en los fondos estatales destinados a la educación pública y la salud**, se enmarcaban en el plan de reorganización estatal para cubrir el déficit del Estado. Parte de dicho plan

fue el achicamiento en del presupuesto de las provincias, generando el empobrecimiento de las provincias del norte de la Argentina. Generando los índices más altos de desocupación de la historia, no sólo en dichas provincias, sino también en el Gran Buenos Aires y el resto del país.

U3

Tema 2 INTRODUCCIÓN A " Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual" Juan Carlos Portantiero  
Por Miguel Angel Ferraro

El concepto de hegemonía es utilizado por el marxista(3) italiano Antonio Gramsci (1917/1977) y tiene que ver con el predominio político económico social y cultural que un grupo o clase social sobre otra.

*(3) Les recomiendo que realicen una lectura de los conceptos de marxismo que explique en la Unidad 2*

En el capitalismo desde esta perspectiva la hegemonía es ejercida por las clases dominantes, también destaca el autor la importancia que tienen los intelectuales en la consolidación del liderazgo cultural de las clases dominantes.

Gramsci, profundizando en esta problemática, pretende advertir que el fenómeno de la dominación en las sociedades capitalistas modernas, es un proceso complejo. Además de los aparatos de coerción que tiene el Estado, que representan una especie de "límite último" (que garantiza la supervivencia del orden burgués), interviene toda una serie de mecanismos de transmisión ideológica tendientes a lograr un consenso que le otorga bases más sólidas a la dominación. Así, hace un análisis profundo de las formas mediante las cuales las clases dominantes conservan su supremacía en las sociedades de capitalismo desarrollado, que resultan resistentes a la "irrupción inmediata del elemento económico", a las contradicciones estructurales(4).

*(4) Ver concepto de Estructura de Marxismo (Unidad 2 de la Cátedra)*

En el texto de Portantiero podemos ver la conflictividad que había en la sociedad Argentina anterior a la dictadura de 1976 y la imposibilidad de los grupos dominantes de establecer una clara hegemonía. Esto es lo que Portantiero denomina "empate hegemónico".

---

"Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual" Juan Carlos Portantiero

---



*CORDOBAZO 29 DE MAYO DE 1969*

Estas notas forman parte de un intento de fundar, a partir del materialismo histórico, la relación específica que se plantea, en la argentina actual, entre el **desarrollo de las contradicciones en el nivel económico-social y en el nivel político-social**.

El supuesto que opera detrás del análisis es que entre ambos niveles se manifiesta una **diferencia de "tiempos"** y que, por lo tanto, el "descubrimiento" de la contradicción principal en el plano económico-social no implica encontrar a la misma simultáneamente "desplegada" en el plano político-social. Esa diferencia de tiempo de la contradicción sólo es eliminada a través de un proceso histórico y esa es precisamente, la tarea a resolver por toda estrategia revolucionaria correcta: **la fusión de los tiempos disímiles de la contradicción sólo se consuma plenamente en el período de la revolución social**.

El objeto del trabajo es, por lo tanto, **el análisis de la coyuntura**; el estudio de las reacciones de fuerza política en la sociedad argentina. Su finalidad, inscribirse en la discusión y, por medio de ella, en la práctica de constitución de un bloque social de poder alternativo al dominante, que se consumará a través de un proceso en cuyo punto de llegada las contradicciones tal cual se dan en el plano económico-social coincidirán con las que aparecen en la escena política.



En el trabajo distinguiremos dos niveles conceptuales. A uno lo llamaremos el de las "**clases sociales**"; al otro, el de las "**fuerzas sociales**". El segundo no puede fundarse sino sobre el primero, pero su constitución supone un proceso histórico relativamente autonomizado.

◆ El nivel que llamamos de las **clases sociales** marca "**la relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura objetiva, independiente de la voluntad de los hombres**".

◆ El de las **fuerzas sociales** marcaría "**la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas (...) la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido**". (1)



Con los conceptos de **clase social** y **fuerza social** así definidos se conectan, respectivamente, el de "**alianza de clases**" y el de "**bloque de fuerzas**", asociados entre sí de la misma manera que lo están los anteriores.

◆ Una **alianza de clases** supone una articulación de clases y fracciones de clase que el observador establece como "necesaria", al margen de la voluntad de los actores, a través de la adjudicación de "intereses objetivos" en términos de la contradicción en el nivel de la estructura de una formación económico-social. Las clases y fracciones así agrupadas conforman, por lo tanto, un específico "campo de interés".

◆ El **bloque de fuerzas** supone, en cambio, un complejo proceso de constitución en el que interviene la conciencia y la voluntad de los actores sociales. Su escenario es la política y su objetivo el poder; allí, las clases sociales (y aun otros grupos que no podrían ser definidos rigurosamente como tales) actúan a través de fuerzas sociales, es decir, como producto de un intercambio entre objetividad y experiencia, entre estructura y superestructura, entre posición objetiva y organización voluntaria.

Tanto la alianza de clases como el bloque de fuerzas no son unidades indiferenciadas; en su interior operan también las **contradicciones** -aunque de grado secundario- y la relación entre los componentes no es simétrica: **uno de ellos "domina" sobre el resto**. Para marcar esa dominación en el nivel de los proyectos de las fuerzas sociales, del bloque de fuerzas, cuyo campo de constitución es, como queda dicho, la política, reservamos el concepto de "**hegemonía**". Para el nivel de los intereses, de las clases, de la alianza de clases, cuyo campo de constitución es la economía, reservamos el concepto de "**predominio**".

👉 En este sentido, la clase o fracción de clase que es predominante en su campo de intereses no es automáticamente hegemónica en el bloque de fuerzas. Esto es válido para cualesquiera de los dos polos de la contradicción principal. Así, la clase o fracción de clase predominante en el interior de las clases propietarias puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones pertenecientes a su mismo campo de intereses. En el otro extremo, la clase o fracción de clase sobre cuya explotación se funda principalmente la dominación puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones pertenecientes a su mismo campo de intereses.

## EN SINTESIS

Toda política orgánica de poder tiende a hacer compatible, en cada uno de los extremos, el predominio con la hegemonía. La asincronía, en uno como en otro, puede perdurar bastante tiempo: esa situación constituye una de las claves principales de la coyuntura política argentina.

---

### 2.1 Predominio económico y hegemonía política

---

El punto de partida de este análisis, al que se toma como dato, es el proceso de **monopolización** operado en la estructura productiva argentina.

 En efecto, a partir de la **década del 60** culmina un proceso de monopolización de los sectores fundamentales de la economía y de creciente control de las actividades productivas y financieras por parte del capital extranjero.

Dicho proceso instala como fracción de clase predominante en el interior de los grupos propietarios a la gran **burguesía industrial, financiera y comercial monopolista, extranjera o asociada al capital extranjero**, desplazando de su predominio tradicional a la gran burguesía agraria. Nuestra intención no es explicitar los mecanismos que operan en el interior de la estructura económica, a los que damos por supuestos, sino examinar la forma de inflexión de esos datos en los otros niveles de las relaciones sociales, particularmente el político.

El predominio de la fracción monopolista en el terreno de la economía supone la apertura de una nueva etapa que fija las leyes generales de movimiento y constitución de las fuerzas sociales, al redefinir los campos de interés común de las clases. Lo que interesa ver, precisamente, es la forma de pasaje entre predominio económico y hegemonía política, de modo tal que lo económico funcione efectivamente en el análisis como "determinación en última instancia", es decir, como serie de parámetros que fijan los límites de variación posible de las relaciones de fuerza en los planos político e ideológico.

**Una sociedad no aparece, obviamente, como una yuxtaposición de "niveles estructurales", sino como un entrettejido de relaciones sociales, de comportamientos de actores sociales.** Parecería redundante recordarlo, pero ante la ola de nominalismo estructuralista que tiende -al menos en su uso vulgar- a fetichizar los instrumentos analíticos como si fueran estructuras concretas, la reiteración no es inútil. La sociedad, recuerda Marx en su famosa **Carta de Annenov** de 1846, es **"el producto de la actividad recíproca de los hombres"**. En la medida en que esa reciprocidad no está regulada por el azar sino que detrás de la misma opera una legalidad que le otorga sentido, las distinciones analíticas que propone el materialismo histórico tienen la finalidad de hacer inteligible lo que en la representación aparece como un caos. Es a partir de esa necesidad de explicación que tiene sentido postular que **"la sociedad no consiste en individuos sino que expresa la suma de las relaciones y condiciones en las que los individuos se encuentran recíprocamente situados"** (2) y que vale la diferenciación entre los "niveles" de la realidad social (estructuras económicas, política, ideológica), entendiéndolos como categorías analíticas, como dimensiones que ayudan a explicar la interrelación de las estructuras concretas. La reificación de las categorías conduce, en cambio, a una revitalización del reformismo - alimentado por una lectura autosuficiente del prefacio de **Marx a la Crítica de la Economía Política** - según el cual la historia sería "producto" de las estructuras, mientras la acción humana, la voluntad, la experiencia, quedan reducidas a un rol subordinado.

Siguiendo estos supuestos, la pregunta que, según **Gramsci**, surge como central en el **marxismo**, esto es, cómo de la estructura nace el movimiento histórico, queda sin respuesta. Paradojalmente, la "rigurosidad" en el tratamiento de las leyes que rigen la estructura puede transformarse así en virtual indeterminación para el campo de la política, sobre el que muy poco podría predecirse: por un camino sinuoso, el determinismo se convierte en espontaneísmo.

El nivel de **análisis** elegido para este trabajo es el de las relaciones de fuerza política, es decir, un espacio en el que operan fuerzas sociales, en el que los conflictos de clase aparecen transmutados como conflictos entre fuerzas, en el que las alianzas de clase buscan constituirse como bloque de poder a través de un proceso relativamente autónomo de la determinación estructural, de un proceso complicado que califica la discontinuidad existente entre estructura y superestructura.

 Pero esa distancia, que funda la autonomía de la política, no significa que ésta gire en el vacío. **El análisis en el nivel de la coyuntura supone una caracterización científica de la etapa económica y de sus consecuencias en el nivel de las clases sociales.** El examen de lo político no puede realizarse a espaldas de lo económico: se asocia con él, en la medida en que aparece como condición para medir la desviación o la correspondencia entre los "tiempos" de la contradicción.

Una nueva etapa económica supone la definición primaria de nuevos actores sociales, a la vez que determina reajustes en los campos de interés. En un primer momento los nuevos protagonistas aparecen definidos objetivamente en el nivel de las clases; su representación social y política, sin embargo, se demorará. Durante todo un período el espacio de la política estará primordialmente ocupado por núcleos residuales, fuerzas sociales y grupos políticos demorados cuyas respuestas apuntan a preguntas planteadas durante la etapa anterior y que sólo en ella podían ser satisfechas. Estos rezagos que desvían o amortiguan las nuevas líneas de conflicto social planteadas por los cambios en la economía, pueden ser, en el corto plazo, factor principal de las decisiones políticas: desautorizados históricamente en el nivel estructural, "vaciados" ya de contenido si se los observa desde el futuro, suelen manifestarse como protagonistas principales en el plano político presente.

Una situación en que los nuevos encuadramientos de clase no se encarnan en fuerzas sociales que se correspondan con ellas no es excepcional: una etapa se cierra primero en el plano económico-social que en el plano político.

Nuestra hipótesis central es que esa situación se da hoy en la sociedad argentina con un arrastre de casi dos décadas: desde mediados de los años cincuenta, cuando entra en crisis el ciclo de industrialización sustitutiva, al ritmo del cual se desarrollaron, durante veinte años, las fuerzas productivas en el país.

➔ **Nuestro punto de partida para el análisis de una sociedad y de una coyuntura es la lucha de clases.** Desde la perspectiva del materialismo histórico sólo ese examen nos permite determinar la contradicción principal, las contradicciones secundarias o subordinadas y las relaciones entre ambas. Descubrir la contradicción principal supone, según Mao, "descartar la arbitrariedad subjetiva"; su dilucidación se mueve por lo tanto en el nivel objetivo, el de los campos de interés, el de las clases, sus enfrentamientos y sus alianzas. **Gramsci** calificará este momento como el primer grado en el análisis de la **relación de fuerzas**, "*que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas*". (3)

Este nivel es fundante pero no agota el análisis de la realidad, no nos instala aún en el espacio político de la lucha de clases. "**El desarrollo de los aspectos contradictorios en cualquier contradicción es siempre desigual**", señala **Mao**, y esa desigualdad, que marca los aspectos principal y secundario de la contradicción, tiene que ver con la voluntad, penetra en el nivel de las superestructuras. "**En un proceso determinado o en una etapa determinada del desarrollo de una contradicción, el aspecto principal es A y el aspecto secundario es B, pero en otra etapa o en otro proceso, los papeles se invierten; éste cambio está determinado por la extensión del crecimiento o disminución de la fuerza con que cada uno de los dos aspectos lucha contra el otro en el desarrollo de las cosas**" (4). Sólo el "**esfuerzo de los revolucionarios**", anota Mao, hará que las circunstancias desfavorables se truequen en favorables.

➔ Estamos ya en el segundo grado gramsciano del análisis de la relación de fuerzas, el político que valora, de acuerdo con Gramsci, "**el grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diversos grupos sociales**". Es decir, entramos en el nivel de las fuerzas sociales, en el de la correspondencia, analizada como proceso, entre estructura y superestructura.

## 2.2 La contradicción principal en la Argentina

➔ Es a partir del análisis de esa "**realidad rebelde**" que, en términos gramscianos conforma el **primer grado de la relación de fuerzas**, que puede determinarse objetivamente el "**tipo**" de **sociedad** (abarcando en la definición simultáneamente la "contradicción principal" y las "contradicciones secundarias" que operan en el nivel estructural), así como el "**tipo de revolución**" que tal sociedad puede plantearse con realismo.

Este análisis incluye, desde el momento en que el capitalismo es un sistema mundial, no sólo las relaciones sociales objetivas que predominan en el interior de cada sociedad nacional, sino los nexos que ligan a ésta con el sistema internacional capitalista, entendiendo a éste no como "la yuxtaposición de sistemas capitalistas nacionales", sino como una red integrada de relaciones cuyo eje es la acumulación a escala mundial. (5)

👉 La **Argentina** formaría parte, así, del conjunto de **sociedades capitalistas dependientes**.

◆ Decimos que es capitalista porque tanto en la ciudad como en el campo, predominan abiertamente las relaciones capitalistas de producción, distribución, consumo e intercambio. Partiendo de este análisis de la lucha de clases en el plano social, **la contradicción principal aparecería como contradicción entre fuerza de trabajo y capital, entre proletariado y burguesía**, de acuerdo con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de relaciones de propiedad dominantes.

◆ Pero añadimos que la sociedad argentina es **dependiente**, esto es, forma parte de los países llamados del "**Tercer Mundo**", insertados en una división internacional del trabajo establecida por las naciones imperialistas. La dependencia que oprime a la Argentina sería así una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia"(6). Para algunos, el significado de la dependencia sobre la sociedad

argentina como totalidad sería de tal magnitud, que la contradicción principal se redefiniría como antagonismo entre Nación e Imperialismo.

En buena medida, tácita o explícitamente, la discusión de las estrategias políticas revolucionarias gira alrededor de esas posiciones extremas que, al ubicar ambas el eje de la lucha de clases en el marco nacional y no en el del capitalismo como sistema mundial, disocian alternativamente a los dos componentes de la definición, enfatizando sea el capitalismo como sistema nacional de estratificación o a la dependencia como sistema mundial de estratificación.

Lo correcto parece ser encontrar el punto en que ambas variables se articulan, tal como lo plantea la moderna teoría marxista de la dependencia:

"la controversia -señala **Amin**- podrá superarse únicamente si se considera que la lucha de clases no se desenvuelve dentro de los cuadros nacionales, sino en el cuadro del sistema mundial" (7).

Empíricamente, para el caso argentino, que es un grado dentro de la escala de capitalismo dependiente, ese plano de articulación sólo puede encontrarse a través del examen de las características con que opera actualmente el capital imperialista, superada la etapa de dependencia con relación a Gran Bretaña y de crecimiento "hacia afuera" de las fuerzas productivas. Desde ese momento, ubicable muchas décadas atrás, el imperialismo dejó de ser un factor primordialmente "externo" para transformarse básicamente en "interno", en pivote estructural de la economía. La Argentina siempre ha sido una sociedad con escaso poder de decisión, pero esa subordinación, actualmente, se ha "interiorizado" mucho más, fusionando al imperialismo con la estructura productiva local más desarrollada: no estamos enfrentando solamente a una "bomba de succión" exterior al sistema sino a un componente interno, expresado en el control del capital extranjero sobre los centros más dinámicos de la actividad industrial, constituido así en factor decisivo para la expansión de las relaciones capitalistas de producción.



A partir de esta característica, la contradicción principal en la Argentina se establece por el antagonismo entre dos campos de interés, dos alianzas de clase, lideradas respectivamente por el capital imperialista enraizado en la estructura productiva y por la fracción del proletariado directamente explotada por él.

Extendiendo a la sociedad global la definición que **Serge Mallet** utiliza específicamente para el mundo obrero, esta contradicción entre burguesía monopolista y proletariado industrial, en el espacio de la fábrica dominada por el capital imperialista, constituiría -claramente desde los años 60- el "nudo estructural" de la sociedad, el terreno de constitución de las principales fuerzas en pugna.

➔ Ambos sectores predominarían, a su vez, en el interior de sus campos de interés sobre otras clases o fracciones, por lo que **un segundo paso en el análisis** debe llevar a determinar empíricamente la composición específica de cada una de estas alianzas, así como las contradicciones secundarias que operan en el interior de cada una de ellas.

Pero todo esto, por más refinado que resulte el análisis (y está claro que cuanto más lo sea mejores podrán resultar a posteriori las conclusiones políticas) nos mantendrá todavía en el examen del **nivel económico-social de la contradicción**, sin relacionarlo con la diferencia de "tiempos" que lo alejan de los otros niveles. Lo que nos marcaría es "el grado de realismo y posibilidad de realización" (Gramsci) de las luchas políticas e ideológicas; es decir, la "determinación en última instancia" del movimiento de lo económico sobre el movimiento de las otras instancias.

Pasar de ese nivel al de las relaciones de fuerza políticas supone una discontinuidad, una ruptura: en el plano del examen de coyuntura decir que la contradicción principal en la Argentina actual se da entre proletariado y capital imperialista es sólo fijar un punto de partida no un punto de llegada, en tanto éste sólo puede hallarse en el espacio de la lucha concreta por el poder político. Pero, a la vez, la eficacia de esa lucha desde el punto de vista revolucionario no puede fundarse sin tomar como básico, como determinante, al nivel económico-social de la contradicción.

 No hay, en una palabra, posibilidad de constitución de un bloque social de alternativa destinado a reemplazar revolucionariamente al estado actual, sin un "descubrimiento" científico de las alianzas de clases que expresan campos de intereses antagónicos y del papel predominante que en una u otra de ellas tiene objetivamente una fracción de esas clases. Y esto, porque la base de toda estrategia eficaz es el logro de la correspondencia entre el nivel económico-social de la contradicción y el nivel político-social.

Esta relación entre niveles no siempre aparece articulada en la discusión política e ideológica de los grupos que en la Argentina se postulan como revolucionarios. La trabazón entre las dos instancias de la contradicción se disocia, sea en un socialismo que puede acertar en el pronóstico a largo plazo pero que se muestra ineficaz para operar en la coyuntura, o en un politicismo que puede acertar en la descripción del momento presente pero que por desconocer toda ley que opere más allá de la realidad visible, resulta incapaz de proyectar una estrategia ofensiva a largo plazo.

El camino propuesto por el **marxismo**, cuando opera como teoría de la historia y como principio de dirección política, es otro: **relacionar los dos niveles, establecer desde el punto de vista de la clase que lidera el campo objetivo de la revolución cuál es el grado de correspondencia que existe entre sus intereses y su actualización en el espacio de la política de poder**. Y estudiar también el mismo proceso en el otro campo, **relacionar predominio y hegemonía** en el interior del otro bloque. Por ello, todo análisis de coyuntura (y una línea política no es otra cosa que eso) supone integrar el examen del sistema de contradicciones -de la lucha de clases- tal cual se da en la estructura (para definir así el "tipo" de revolución y las condiciones de constitución de las fuerzas sociales) con la especificación de los aspectos principal y subordinado de ese sistema de contradicciones, esto es, con la discriminación acerca de la relación de fuerzas políticas tal cual ella se da, que es lo que marca en definitiva la característica de la etapa.

 Es en ese sentido que el análisis de coyuntura fusiona sociología y política.

## 2.3 El empate hegemónico

Hemos considerado la contradicción principal en la Argentina de hoy como aquella que enfrenta al proletariado con el capital monopolista.

Pero, especificando una definición política de la etapa actual, agregamos ahora que las líneas generales del proceso desde 1955 se encuadran dentro de lo que llamaríamos fase de **no correspondencia entre nueva dominación económica y nueva hegemonía política**.



Con esta definición nos ubicamos en el plano en que ya se articulan los niveles económico y político: **el de la determinación del aspecto principal de la contradicción**. El supuesto es que dicho aspecto está desempeñado en la coyuntura argentina por el conjunto de las clases dominantes y por las fuerzas sociales que las representan, las cuales, aunque con dificultades para resolver dentro de su bloque el problema de la hegemonía, se hallan en una etapa de ofensiva en la que por momentos aparecen -como resultado de las presiones de las clases dominadas y de las contradicciones que operan en el interior del bloque dominante- situaciones de equilibrio de fuerzas, que, como en el presente pueden dar lugar a un repliegue político del capital monopolista.

Todo este período en el que la iniciativa política puede encuadrarse dentro de los intentos de la fracción monopolista del capitalismo por transformar su predominio económico en hegemonía, se resume en los siguientes rasgos característicos:

- ◆ **Situación de ofensiva general de las clases dominantes.**
- ◆ **Fragmentaciones en el interior de ese bloque** como resultado de la aparición de contradicciones de tipo secundario entre las clases y fracciones que lo integran;
- ◆ **Proyección de esas fragmentaciones en el plano político** (lucha por la

hegemonía) a través de la aparición de proyectos alternativos y de división y reparto de control sobre distintos aparatos sociales (Fuerzas Armadas, partidos políticos, burocracia sindical, etc.).

◆ **Situación de "empate hegemónico"** -que en los momentos críticos asume formas de "vacancia hegemónica"- en el interior del bloque, aunque a la larga el proceso opere en favor de la fracción económicamente dominante -el capital monopolista- a un costo mayor que el esperado.

Esta descripción de los rasgos más característicos de la etapa está concebida a partir de las clases dominantes, porque su ofensiva marca el aspecto principal de la contradicción. Parecería, por lo tanto, que las clases dominadas no tienen ninguna presencia política y no ejercen, correlativamente, ninguna influencia en los desplazamientos que se operan en el poder, en la incapacidad que manifiesta el sector predominante para transformarse en hegemónico.

La situación, por supuesto, no es ésta, ni teórica ni empíricamente. Todo análisis de coyuntura es análisis de una relación entre fuerzas dominantes y dominadas, en que el movimiento de unas supone el desplazamiento de otras. Por ello, si una etapa puede ser leída analíticamente desde dos ópticas, en la perspectiva de las clases dominantes y en la de las clases dominadas siempre, en la realidad, una aparece como reverso de la otra, como pares que se condicionan mutuamente y que sólo analíticamente pueden ser aislados.

Cuando caracterizamos, por ejemplo, a la situación argentina como una situación de asimetría entre predominio económico y hegemonía política, estamos haciendo referencia, en términos de las clases dominantes, a la existencia de una situación de "crisis orgánica". Pero una situación de crisis orgánica es siempre, potencialmente, para las clases dominadas, una "situación revolucionaria". En este sentido, los rasgos de una y otra se complementan.

Para **Gramsci**, una **crisis orgánica** es aquella en que :

*"los partidos tradicionales con la forma de organización que presentan, con aquellos hombres que los constituyen, representan y dirigen ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ellas" (8). Esto origina una "crisis de autoridad" que tiende a reforzar "la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública".*

El punto de partida de una "situación revolucionaria" según Lenin se define por rasgos parecidos: "crisis en las alturas" y crecimiento de la movilización (9). Pero lo que Lenin enfatiza en ese texto son las condiciones para que esa crisis de hegemonía, que desde la perspectiva de las clases dominadas conforma una situación revolucionaria, se transforme en crisis revolucionaria.

Nuestro esfuerzo se orientará hacia el enfoque de la situación en términos de crisis orgánica, es decir, en un nivel en el que la presencia de las clases dominadas opera sólo en un segundo plano.

En estos términos, una **caracterización particularizada de la coyuntura actual** se resumiría en estos rasgos:

- ✓ **Mantenimiento crónico de una situación de crisis orgánica** que no se resuelve como nueva hegemonía por parte de la fracción capitalista predominante ni como crisis revolucionaria para las clases dominadas.
- ✓ **Predominio de soluciones de compromiso** en las que "fuerzas intermedias", que no representan consecuentemente y a largo plazo los intereses de ninguna de las clases polares del "nudo estructural" ocupan el escenario de la política como alternativas principales, aun cuando su constitución sea residual y su contenido heterogéneo inexpresivo de las nuevas contradicciones generadas por el desarrollo

del capitalismo monopolista dependiente en la Argentina.

Con estos alcances tendría sentido una definición de la situación de hoy en el plano político-social como de "empate": "Cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría".

Nuestra hipótesis es que la raíz de esa situación se halla en que ninguna de las clases sociales que lidera los polos de la contradicción principal (capital monopolista/proletariado industrial) y que son por ello objetivamente dominantes en su respectivo campo de alianzas ha logrado transformarse en hegemónica de un bloque de fuerzas sociales.

El golpe de Estado del 28 de junio de 1966 significa en la historia política argentina algo más que un mero relevo de gobierno por vía de la típica insurrección cuartelera latinoamericana: se trata del intento más decidido realizado hasta hoy por la fracción dominante en el nivel económico-social, para superar a su favor una situación de crisis orgánica y transformar ese predominio en hegemonía.

Su punto de partida es, en ese sentido, similar al del alzamiento militar ocurrido en Brasil en 1964. Los resultados sin embargo, han sido distintos: mientras en Brasil el capital monopolista logró, a través de la consolidación de una oligarquía militar-industrial, superar la "crisis de autoridad" en la Argentina la crisis hegemónica se mantiene en los términos iniciales, aún cuando en el nivel económico el predominio del capital monopolista se haya acentuado desde entonces.

Pero esa potencia económica no pudo transformarse en potencia política; los nuevos grupos dominantes en el terreno de la producción no fueron grupos dominantes en el terreno de la producción, no fueron capaces de crear nuevas fuerzas sociales estables que los representaran o de utilizar a su favor las preexistentes. Su hegemonía sólo se expresó en la fase en que, dentro de la relación permanente violencia-consenso, predominó abiertamente la primera, es decir, hasta mediados de 1969. Pero cuando esa violencia engendró su réplica, la fórmula de poder a diferencia del caso brasileño, se desequilibró. El intento por buscar, a partir de ese fracaso, nuevos mecanismos consensuales, tampoco tuvo éxito: hoy, en la escena política vuelven a dominar los

desalojados en 1966, con lo que la situación de crisis orgánica que provocó el estallido de la "Revolución Argentina" sigue en pie, agravada para el capital monopolista por la participación que en el bloque político triunfante el 11 de marzo tienen fuerzas que representan abiertamente tendencias socialistas, fuerzas cuya movilización fue decisiva para la victoria electoral, pero cuyo nivel de organicidad es aún bajo.

 Los protagonistas centrales de ese movimiento pendular sin triunfadores políticos netos son, en el primer nivel estructural, el capital monopolista extranjero o asociado con el imperialismo; el capital nacional y una rama particularmente importante de éste, la burguesía agraria. Políticamente estos grupos se han expresado predominantemente a través de cuatro actores:

- ◆ los partidos políticos,
- ◆ las Fuerzas Armadas,
- ◆ la burocracia sindical
- ◆ y una nueva conjunción que llamaremos el "establishment", integrado por tecnócratas y por representantes directos de capital monopolista que al margen de los partidos, asumen roles de élite política.

La coyuntura arranca con una ofensiva hegemónica del capital monopolista que se consolida, en el primer período de la Revolución Argentina durante el lapso que podríamos personalizar en la pareja Onganía-Krieger Vasena. En esa etapa efectivamente, el predominio del capital monopolista se transformó en hegemonía dentro del bloque dominante, y el capital nacional y la burguesía agraria debieron supeditarse políticamente a él. Ello se logró a través del establecimiento de una nueva fórmula de poder que arrasó con el régimen de partidos y lo suplantó con una coalición entre las Fuerzas Armadas y el establishment, la que se intentó agregar a la burocracia sindical.

Esta fórmula aparecía como la respuesta más coherente en el nivel de las fuerzas sociales para las necesidades que la lógica del desarrollo capitalista venía planteando desde tiempo atrás. Queremos decir con ello que los contenidos del movimiento de 1966 estaban ya larvadamente diseñados cuando encontró su techo, a mediados de la década del 50, el modelo de crecimiento capitalista vigente hasta entonces. A partir de ese momento la historia de las clases dominantes argentinas es la historia, zigzagueante, de la búsqueda de ajustes entre las nuevas condiciones económicas y las estructuras políticas.

Estas nuevas condiciones económicas suponen la necesidad de un proyecto de crecimiento a largo plazo caracterizado por cambios de orientación en la política frente al capital extranjero, frente a la promoción industrial y frente a la política laboral, tendientes a favorecer un modelo de acumulación adaptado al crecimiento de los sectores monopolistas.

Una orientación de ese tipo en los grupos predominantes de la burguesía es posible comenzar a detectarla, a partir de la crisis de 1952, como un intento dirigido desde entonces a concluir con la política distribucionista y con la ineficacia de las empresas surgidas al amparo del proteccionismo y del proceso inflacionario y a utilizar el poder del Estado para obtener el desarrollo de las economías externas requeridas por su propia dinámica de crecimiento, sólo posibles a través de una acción pública que incrementase las inversiones en obras de infraestructura y, por lo tanto, racionalizara el desempeño del Estado mediante la eliminación de gastos improductivos.

Ese proceso no encontró, durante años, sino ecos adormecidos en el poder político, siendo que, como en todo salto en el desarrollo capitalista el papel a cumplir por el Estado resultaba una variable imprescindible. Finalmente, en 1966, como antes en 1930 y en 1943, fueron las Fuerzas Armadas quienes, encaramándose en el proceso de desarrollo del capitalismo, disolvieron las estructuras políticas anteriores y se transformaron en dinamizadoras de la nueva etapa.

- ◆ Las Fuerzas Armadas completan así en 1966 un ciclo político cuya primera versión había estallado en 1955 con el derrocamiento del nacionalismo popular peronista, operado cuando tenían lugar los primeros síntomas de la crisis. Desde ese momento, es decir, desde el agotamiento del tramo industrializador sustitutivo de

importaciones de manufactura liviana, se planteaban para el futuro del capitalismo en la Argentina dos alternativas básicas. Una, forzar la marcha llevada hasta entonces por el peronismo hacia un modelo de desarrollo basado en una sólida alianza entre el Estado y el capital nacional para estatizar los centros fundamentales de acumulación.

- ◆ Otra, crea las condiciones para una etapa del desarrollo capitalista en la Argentina, mediante la implementación de políticas que, acentuando la dependencia, fueran capaces de garantizarle a los sectores más concentrados el control de la economía.

- ◆ Quedaba, por supuesto, una tercera y residual alternativa: la instrumentación de una política de compromisos constantes entre las clases y fracciones de clase dominantes por la que el Estado se transforma en una suerte de campo neutro donde todas ellas compiten, obteniendo beneficios inmediatos según la fuerza de su presión.

El derrocamiento del nacionalismo popular descartó la posibilidad de un desarrollo vía capitalismo de Estado, pero también condujo al establecimiento de una nueva hegemonía mediante la cual el conjunto de las clases dominantes acatará la dirección del capital monopolista.

En **primer lugar**, porque en el nivel económico el proceso de predominio de capital monopolista no estaba aún consolidado y el poder de las otras fracciones de clase, en especial la burguesía agraria, era muy grande. En **segundo lugar**, porque la fórmula de poder se construyó alrededor del consenso que podían prestar los partidos políticos, ligados en su mayoría con los proyectos de capital nacional y la burguesía agraria.

Esta **fórmula de poder**, en la que los partidos políticos debían jugar un rol protagónico, fracasó: la llamada "Revolución Libertadora" de 1955 fue, quizás, el último intento orgánico de la burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el bloque dominante.

Sobre ese fracaso aparece en 1958, la alternativa de Frondizi. Básicamente el gobierno de Frondizi es un capítulo del proceso de maduración de los intentos hegemónicos de capital monopolista y del afianzamiento de su predominio en el terreno económico, por el aliento dado entonces a la

radicación de inversiones extranjeras.

En el plano político la etapa supone la emergencia, en la fórmula de poder que se busca instaurar, de nuevas fuerzas sociales: el establishment, que comienza a asumir roles importantes en el aparato del Estado, y la burocracia sindical. Entretanto, el sistema de partidos políticos es relegado a un segundo plano, hasta el punto que incluso se arrastra a una virtual disolución al propio aparato partidario oficialista: el "frondizismo" es mucho más "desarrollismo" que "radicalismo intransigente".

El intento de estabilizar una nueva fórmula de poder, sin embargo fracasó. En un plano, porque pese a permitir el avance de capital monopolista sobre las otras fracciones buscó constituirse en factor unificador de conjunto de la burguesía. La hegemonía de capital monopolista supone el sacrificio de sectores de las clases dominantes; en la experiencia llevada a cabo entre 1958 y 1962 se trató en cambio, de articular una política que mantuviera simultáneamente los niveles de protección para el capital nacional, que siguiera transfiriendo ingresos a la burguesía agraria y que garantizara altos beneficios para el capital monopolista.

Todo ello, en los hechos, se contrarrestaba y traía como consecuencia un acentuamiento de la ineficacia del sistema en términos de su funcionalidad para la fracción predominante. Como modelo, el propuesto por el desarrollismo quedó así como un intento pragmático de compromiso entre todos los grupos dominantes locales y el capital extranjero. A diferencia del ciclo de la Revolución Libertadora, que sólo intentó resarcir a la burguesía agraria y al imperialismo de las pérdidas que le infligiera el nacionalismo popular, el frondizismo proyectó ir más allá y superar los límites ya exhaustos de la industrialización liviana, mediante el pasaje a una etapa de desarrollo de ramas industriales más estratégicas. Pero ese objetivo sólo puede lograrse, en el cuadro de las relaciones capitalistas, entregándole al Estado las llaves de la acumulación o poniendo al Estado al servicio del capital monopolista. Al fracasar en sus objetivos económicos por su incapacidad para consolidar un proyecto consistente, el frondizismo fracasó también en la construcción del esquema del poder: no pudo satisfacer las necesidades que planteaba la coalición con la burocracia sindical ni con las Fuerzas Armadas, no satisfizo totalmente al establishment y no logró construir una alternativa frente al sistema de partidos políticos que se le oponían desde la tribuna parlamentaria. Cuando a principios de 1962 fué desalojado, su legitimidad era nula y el vacío hegemónico se planteaba. Quedaba como saldo, como soporte para la nueva etapa, el fortalecimiento de las posiciones

económicas del capital monopolista. Pese a ello, los primeros pasos del régimen militar posfrondizista parecieron marcar una resurrección de la gran burguesía agraria. Duró poco: el ministerio de Economía de Federico Pinedo, en 1962 fué como el último estallido victorioso de una ofensiva de la vieja oligarquía.

Tras ese episodio surge una suerte de "ensayo general" en el que dos de los protagonistas principales del movimiento militar de 1966 aprontan sus efectivos; la constitución de una nueva élite político-militar, el ascenso a funciones de gobierno de una burocracia formada por tecnócratas y asesores del capital monopolista, esto es, la coalición entre establishment y Fuerzas Armadas que caracterizará el primer tramo de la Revolución Argentina, tiene su anticipo en el gobierno de José María Guido, entre 1962 y 1963.

Pero esta élite no estaba, sin embargo, lo suficientemente fortalecida en 1963 como para otorgar salida hegemónica a un proceso que en lo económico ya estaba maduro. Es sobre la base de esta reiteración de una vacancia, que los partidos políticos resurgen de sus cenizas y forjan el gobierno de Arturo Illia; tras ellos el capital nacional y la burguesía agraria, sus tradicionales soportes históricos, recuperan posiciones perdidas y, entre 1963 y 1966, jaquean, a veces con éxito, al capital monopolista que carecía de expresión política estable.

Pero este triunfo de los partidos políticos y de las clases que son expresadas por ellos debía ser efímero: iba a contramano de la lógica del desarrollo capitalista, suponía un desfase demasiado grande entre economía y política.

Los partidos políticos, como categoría institucional, suponen la vigencia de un sistema particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un escenario y determinadas condiciones para su constitución: el escenario es el parlamento y su condición de existencia, la consulta electoral periódica. En la Argentina, dadas las características de reclutamiento de la "clase política", los partidos tienden a ser la expresión política predominante del capitalismo nacional, urbano y rural.

El parlamento es así una tribuna en la que confluyen múltiples intereses "particularistas", el único recinto en el que las clases y fracciones de clase económicamente subordinadas en la alianza dominante pueden llegar a predominar políticamente. En esa suma de intereses particularistas

expresados en el parlamento, se incluyen también los del capital monopolista, pero la condición para su coexistencia es el estado de compromiso permanente. Un compromiso que debe abarcar además, en alguna medida, a las clases populares, porque las consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere retórica, de intereses "universalistas". En el parlamento, el capital monopolista es llevado a la mesa de negociaciones y su presencia en ella es subordinada. La elaboración de un proyecto hegemónico no pasa por su presencia en ese escenario: se desplaza hacia otros centros de decisión política: las Fuerzas Armadas, la tecnocracia ubicada en el aparato del Estado y la burocracia sindical, con la que está relacionada por el "toma y daca" del conflicto económico.

El proceso lleva a los partidos políticos y a las instituciones en que ellos actúan a girar en el vacío. Un resultado que en la Argentina no fue difícil de conseguir dada, por añadidura, la situación de proscripción política de las grandes masas populares que no se sentían representadas a través del sistema de partidos. Este hecho, sumado a la carencia de representatividad de los intereses económicamente predominantes, llevó en 1966 al completo desgaste institucional.

Cuando en junio de ese año los militares toman por asalto el poder y utilizan como una explicación de su alzamiento el deterioro de los partidos políticos decían una verdad: su "**crisis de autoridad**" era total. La acumulación de capital, el incremento de la eficacia del sistema económico, la racionalización de las actividades públicas, eran demandas que se asentaban sobre la lógica del desarrollo capitalista: ellas imponían nuevas políticas, contradictorias con las aspiraciones de las masas populares y con los intereses de las clases económicamente subordinadas de bloque dominante. No estaba en la capacidad del sistema de partidos asumir esas tareas: **es a ese cuello de botella político de desarrollo capitalista que el golpe de junio viene a poner fin.**

## 2.4 A la búsqueda de una nueva hegemonía

El plan monopolista en la economía tiene como correlato, en la política, a un modelo de Estado autoritario que concentre el poder asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política. La nueva organización del capitalismo, en la que el Estado debe jugar un fuerte papel intervencionista como dinamizador de la economía, obliga a concentrar el poder fragmentado. El Parlamento -institución concurrencial en la que los partidos son portadores de las presiones de todas las fracciones en que se divide la clase dominante- pierde así vigencia: en ese mercado político, desfasado con respecto al mercado económico, los desplazados suelen ser los vencedores. La lógica del desarrollo monopolista no tolera ese desencaje entre economía y política: el Parlamento y los partidos, por ello desaparecen o se subalternizan y en su lugar emerge la autoridad presidencial y la presencia de los tecnócratas y aún de los propios gerentes del capital en las cúspides de la burocracia.

Esta ley se expresa en cada sociedad según características particulares. En la **Argentina** de 1966 fueron las Fuerzas Armadas sus agentes desencadenantes, al tomar el poder para garantizar, de hecho, las condiciones políticas de la dominación monopolista. Al lado de las **Fuerzas Armadas**, la nueva hegemonía quiso fundarse con el agregado de otras dos fuerzas sociales: el **establishment** y la **burocracia sindical**. En esa asociación debía encontrarse una fórmula de poder que fuera expresiva, en el plano político, de la etapa capitalista monopolista dependiente. Pero ese alineamiento nunca pudo estructurarse como una verdadera coalición, con lo que el proyecto hegemónico manifestó siempre extrema vulnerabilidad hasta estallar, por fin, en 1970: enfrentados a una fusión de contradicciones que abarcaba a fracciones desplazadas pertenecientes a las clases dominantes y al conjunto de las clases dominadas y que se expresaba en lo económico, en lo político y en lo ideológico, los soportes socio-políticos del plan monopolista vacilaron, volviendo a crear un vacío de autoridad.

En su discurso de marzo de 1967 anunciando la nueva política económica, Krieger Vasena, cabeza del establishment asentado en el poder, había fijado los rasgos del proyecto y anticipado sus consecuencias sociales:

*"Lo que buscan las autoridades del país es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este premio sea el resultado de su propio esfuerzo". (11)*

El reinado del capital monopolista, entendido como proyecto racionalizador del sistema, supone -y ese era el sentido de las palabras de Krieger Vasena- la eliminación de lo periférico, de lo "artificial". Si la primera etapa de industrialización, a través de la sustitución de importaciones, permitió la coexistencia de distintas fracciones de las clases dominantes gracias a que, en el marco de un rápido crecimiento de las fuerzas productivas, todas tuvieron asegurado el acceso a una porción del mismo, la etapa monopolista supone, en cambio, tensiones y rupturas graves en el interior de los sectores propietarios.

No repetiremos acá un análisis de la implementación del plan monopolista en cuanto hace a sus mecanismos económicos, aspectos sobre el que existe ya una importante bibliografía: nuestro objeto son sus consecuencias sociales y, por lo tanto, la forma en que se redefinen campos de interés y se desplazan los puntos de ruptura políticos.

Si desde la perspectiva de los asalariados el plan monopolista trae apareada una política de shock que desde sus primeros tramos rebaja brutalmente sus ingresos reales, en el interior de las clases dominantes la hegemonía de la fracción monopolista en la Argentina 1966 supuso una transferencia en la distribución de la plusvalía en perjuicio de la burguesía pequeña y mediana y de la llamada "oligarquía agropecuaria", proceso al que se superpuso un flujo constante de ingresos en favor del Litoral en detrimento del Interior.

Una política de tal modo agresiva, que busca quebrar una situación de "empate", no puede desatarse sino a través del respaldo de la violencia desnuda, montada sobre una estructura vertical, autoritaria del Estado. El supuesto teórico -en la medida en que la pura violencia no puede sostenerse como una situación "normal" en una sociedad compleja- es que los primeros "sacrificios", tras una etapa de disciplina forzosa pueden superarse a no muy largo plazo y crearse las bases para una ampliación del consenso.

👉 En efecto, es condición para la realización política del modelo, que los reajustes en el nivel económico lleven a una racionalización y "modernización" del sistema social, capaz de generar una rápida expansión de las fuerzas productivas, una acumulación de riqueza con la que se podrá "premiar" luego, selectivamente, a distintos estratos en términos de su comportamiento eficiente.

Este supuesto es el que le da sentido al esquema de los **"tres tiempos"** formulado en 1966 por los teóricos de la Revolución Argentina. En realidad, el "tiempo **económico**", el "tiempo **social**" y el "tiempo **político**" por los que debía atravesar ordenadamente la sociedad, pueden ser traducidos como una sucesión ideal de **dos etapas**:

◆ en el **modelo monopolista** operaría **primero** un momento de **Acumulación** (de riqueza y poder) que supone el sostén del autoritarismo armado a la reestructuración económica en beneficio de los monopolios y un momento **posterior** de **Distribución** en el cual, diferencialmente, se repartirían entre otros sectores porciones de la riqueza acumulada y se regularían formas controladas de participación de esos sectores en el poder.

👉 El plan monopolista organiza así una carrera contra el tiempo y su éxito o su fracaso dependen de la velocidad de movimiento de dos factores: el rechazo al proyecto por parte de los perjudicados y la recolección de los frutos del plan, para permitir los necesarios reajustes consensuales. En la Argentina el primer factor desbordó al segundo obligando, desde mediados de 1969, a un repliegue del proyecto hegemónico monopolista, ante una convergencia de variables económicas, sociales y políticas que acumularon diversos puntos de ruptura. Los principales soportes político-sociales del plan de los monopolios, que podían acompañar al establishment en la estructuración del nuevo proyecto hegemónico -las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical- vacilaron frente a la marea de contradicciones concentradas: el "Cordobazo" hirió de muerte a esta primera versión de la hegemonía monopolista.

## 2.5 La nueva crisis política

Efectivamente, el **Cordobazo** del 29 de mayo de 1969 desnuda la fragilidad del nuevo proyecto hegemónico e inaugura, a nuevos niveles, otra etapa de crisis política. **Pero la diferencia con 1966 es notoria: ahora la crisis es primordialmente social; supone un estado general de movilización de las clases populares**, en el que aparecen formas orgánicas de **contenido socialista** como primera respuesta a las nuevas contradicciones sociales argentinas. Es a partir del Cordobazo que la lectura de la crisis puede caracterizarse legítimamente no sólo en término de los conflictos en el interior de las clases dominantes, sino también como "situación revolucionaria" en la definición leninista: cuando las masas son empujadas "a una acción histórica independiente".

 Por eso la crisis actual coloca en primer plano para las clases dominantes y las fuerzas sociales que las expresan el problema del control de esa movilización, en tanto ésta es el embrión de un nuevo movimiento social que busca aún su expresión política orgánica. Por eso también en esta etapa "pre-política" del nuevo movimiento social en que las fuerzas que buscan expresar los intereses de las clases populares se hallan fragmentadas en un mosaico de experiencias, no es "espontaneísta" considerar que la dirección socialista de un proceso se mide más por las posibilidades objetivas que tenga el mismo de alentar la movilización existente en el interior de las masas explotadas por el sistema capitalista dependiente, que por la perfección de los programas o la prolijidad de los métodos de organización.

Para las clases populares, la crisis que se abre en 1969 origina respuestas autónomas que, sin embargo todavía hoy, se expresan más en el plano "social" que en el "político".

Para el capital monopolista la crisis obliga a rehabilitar el espacio de la política, en tanto es en él donde aparecen como posibles todavía -aunque cada vez más limitadamente- tentativas de integración que el plano económico-social rechaza. Esa reivindicación de un escenario que en 1966 se creyó clausurado, equivale a la principal derrota del proyecto hegemónico del capital monopolista, aprovechada por las otras clases dominantes que habían sido subordinadas durante el primer tramo de la Revolución Argentina.

El primer desertor en la aplicación de las formas "puras" de la dominación neocapitalista dependiente

fue el propio aparato militar. Al asumir el poder en 1966, las Fuerzas Armadas justificaron la intervención en base al planteo de objetivos trascendentes, en términos de "empresa nacional". No se evocaron entonces -al menos de manera principal" necesidades de defensa del Orden frente a la Subversión, sino fines positivos: "modernizar" el país, encauzarlo hacia la "grandeza" superando la parálisis a que lo habrían llevado las pujas facciosas, intersectoriales, encarnadas en los partidos políticos. Así lo razonaba la retórica del **"Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino"** emitido el 28 de junio de 1966:

"Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que al operar una transformación substancial lo sitúen donde le corresponde por la inteligencia y el valor humano de sus habitantes y la riqueza que la Providencia depositó en su territorio".

En la literatura militar de la época, el programa era presentado de manera más particularizada. Uno de los teóricos del golpe, que al asumir el nuevo gobierno fue designado secretario del Consejo Nacional de Seguridad, el general Osiris Villegas, consideraba que la Revolución Argentina debía encarnar un nuevo "proyecto nacional" destinado a reemplazar el vigente desde fines del siglo anterior.

"Estamos viviendo -decía- la finalización del período de transición del país agrícola-ganadero, de estructura armónica dependiente, hacia el país industrializado".

Y agregaba:

"No puede trazarse una política fundada en el interés nacional si no se reconoce la situación argentina de país en vías de desarrollo. Este es un concepto económico que hace al tipo de estructura de producción que tiene el país. La política fundada en el interés nacional supone el esfuerzo acelerado para transformar esa estructura de producción en una similar a la de las sociedades industriales. Exige la construcción de industria básica, la promoción de las actividades de la nueva revolución industrial, de la energía nuclear, la electrónica o la cibernética. Reclama la revolución técnica en el campo. Supone, simultáneamente, un gran esfuerzo tecnológico que coordine los esfuerzos de la universidad, las empresas y el Estado en la tarea de modernización". (12)

Todo este "**mesianismo**" se resolvió con la asociación entre el Estado y el capital monopolista, como sustento de la modernización y la grandeza.

Pero esta sociedad no puede ser visualizada como un simple "arreglo" entre intereses inmediatos coincidentes. En la medida en que las Fuerzas Armadas constituyen una fuerza social, sus relaciones con el universo de las clases se hallan mediadas por la ideología. Como institución del Estado en la que la especificidad de sus funciones debe ser justificada en términos de las necesidades de la Nación y no de sus parcialidades, las Fuerzas Armadas siguen siempre una determinada "**doctrina**", que le otorga sentido a sus acciones y en la que tratan de socializar a sus cuadros. Es a través de esa ideología que puede reconstruirse la relación de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas sociales y, por lo tanto, la coincidencia o disidencia con intereses de clase, expresadas como "proyecto".

Durante todo un largo período -especialmente a partir de los años 40- la doctrina militar predominante estaba basada en el concepto clásico de "Nación en armas" y en la hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo a las fronteras geográficas. Ponía énfasis por o tanto, no sólo en la necesidad de autosuficiencia económica -o que derivaba en reclamos de proteccionismo industrial y de impulso a una industria pesada que pudiera resolver los problemas específicamente profesionales de abastecimiento- sino también en la necesidad de control nacional sobre el sistema de decisiones globales de la economía. Esto llevaba a reforzar los roles del Estado y a concebir la

política económica como política de protección de la economía como un todo. El grueso de la literatura militar de esos años parte de un doble supuesto: no hay defensa nacional posible sin base industrial propia; esa base industrial no implica solamente crecimiento económico sino también el control estatal sobre las decisiones básicas de inversión.

Hacia los años 60 esa doctrina cambia. Tras un período de "vacío" en que las Fuerzas Armadas se desintegran en pugnas internas, un nuevo proyecto, cuyas condiciones organizacionales son planteadas por los llamados

"azules" en 1962-63, reemplaza al anterior como dador de sentido para el comportamiento militar. La interconexión entre Seguridad y Desarrollo será desde entonces la nueva clase estratégica presentada por los militares como "empresa nacional".

El enemigo se ha "interiorizado"; el enfrentamiento básico tiene lugar dentro de las fronteras y la "guerra subversiva" es el nuevo tema de preocupación. La función principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la Seguridad dentro de las fronteras. A partir de esto, si se mantiene el énfasis sobre la necesidad de crecimiento industrial -porque éste es un respaldo, al disipar tensiones sociales, de la seguridad- pasa a segundo plano el principio del control nacional sobre las decisiones económicas; no importa tanto quién dirige el desarrollo; lo decisivo es que la nación se modernice.

En 1966, el jefe del Estado Mayor General del Ejército planteó en una conferencia militar continental, estos principios:

"El desarrollo puede definirse como la expresión de un conjunto de cambios en las estructuras mentales y en los hábitos sociales de un pueblo que lo pone en estado de aumentar en forma permanente su producto real global. El desarrollo es a la seguridad lo que la causa al efecto, el origen a la consecuencia, lo principal a lo secundario. Sin desarrollo la seguridad es utopía tanto en el orden particular o nacional como en el orden general o internacional". (13)

Estos cambios en la orientación estratégica de las Fuerzas Armadas, pegadas al esquema cosmopolita de "bipolaridad mundial" planteado por el Pentágono, que relega a los ejércitos de los países independientes a funciones de policía interna, coinciden en la Argentina con la crisis del modelo de industrialización sustitutiva y con la consolidación de poderosos sectores oligopólicos en las ramas más dinámicas de la industria. En su urgencia por el Desarrollo como garantía de la Seguridad, las Fuerzas Armadas parecen encontrarse con la única posibilidad para sacar al país del estancamiento: poner en práctica las políticas diseñadas por el capital monopolista ya que, si no se plantea la alternativa de que sea el Estado quien tome en sus manos la responsabilidad principal del crecimiento económico, la tarea deberá recaer forzosamente en los sectores privados más poderosos y concentrados, los únicos que tienen la posibilidad de dinamizar un proyecto económico.

Este esquema funcionó satisfactoriamente en el primer período de la Revolución Argentina, como lo señalara uno de los principales propagandistas civiles de la nueva coalición: lo que estaba consolidándose en la Argentina era

"una oligarquía político-militar-empresaria, empeñada en asegurar el proceso de industrialización a través de grandes inversiones en la infraestructura y dispuesta a contener, por lo tanto las prematuras presiones de los sectores populares". (14)

Pero este proceso no se desarrolló libre de tensiones, tensiones que sólo hubieran podido ser relegadas con la presencia visible de efectos económicos favorables, que permitieran el rápido pasaje del "tiempo económico" al "tiempo social".

En el tercer año de vigencia del plan, las Fuerzas Armadas se encontraron con que la suma de obstáculos políticos y sociales que imponía la "grandeza" por esa vía era tal, que determinaba costos demasiados elevados y, por añadidura, hacía más vulnerable aún la seguridad.

Los reclamos del capital mediano y pequeño y de la burguesía agraria; las explosiones regionales que abarcaban zonas de desigual desarrollo económico, político y social; la situación de exasperación de los asalariados que desbordaba, en los hechos, los intentos conciliadores de la burocracia sindical y el descontento generalizado de la pequeña burguesía expropiada políticamente

y sometida a una creciente pauperización, crearon una acumulación de fuerzas opositoras al proyecto monopolista tan poderosa, abrieron una crisis social tan honda, que precipitó la fractura de monolitismo militar: a través de esas grietas se filtró el reclamo político de las otras clases propietarias, subordinadas desde 1966 al capital monopolista. Había fracasado la posibilidad de consolidar una oligarquía militar-industrial que hiciera compatibles los intereses de las Fuerzas Armadas con los de los grupos más concentrados de la industria y las finanzas, verdadera clave del proyecto hegemónico neo-dependiente, tal como lo certifica contemporáneamente el caso brasileño.

Desde ese momento la ecuación que relacionaba Seguridad con Desarrollo, depositando a éste en manos del capital monopolista, comenzó a perder sentido; la Revolución Argentina dejó de aparecer como realización de ese proyecto nacional que las Fuerzas Armadas se habían propuesto en 1966. El tema de la Seguridad, a secas pasó a ser prioritario, para conjugarse a partir de entonces con modelos políticos de salidas institucionales, más que con modelos económicos de acumulación.

La mayor velocidad que adquirió la conjunción de intereses contrapuestos al plan, en relación con la lentitud en el pasaje del "tiempo de la acumulación" al de la "distribución" enajenó también al otro soporte prevista por el modelo neocapitalista de desarrollo: la burocracia sindical.

Uno de los presupuestos de la dominación del capital monopolista es el control de la fuerza de trabajo. Y si ese objetivo pasa por una primera etapa de disciplina forzosa asegurada por la violencia, reconoce una segunda de "participación". La clave, para la primera fase, es la eficacia de la política de ingresos, esto es, el poner en marcha las mejores condiciones para la acumulación de capital en favor de los grupos más concentrados de la economía. "El eficiente funcionamiento de la política de ingresos -señala Krieger Vasena- es primordial para el desarrollo con estabilidad y aun cuando aisladamente cada uno pueda pretender más de lo que le corresponde en esta transición, el gobierno ha de mantenerse inflexible ante presiones que, analizadas en conjunto y desde un plazo superior, no son atendibles."

→ En **la segunda etapa**, una vez sometida políticamente, la burocracia sindical, la orientación del Estado no consiste en procurar su desaparición o su debilitamiento institucional, sino su subordinación al plan del capital como un mecanismo consensual importante, como un reaseguro contra la movilización popular.

La estrategia del capital monopolista incluye como supuesto la posibilidad de promover la existencia de sectores obreros privilegiados que pueden conseguir que en las ramas industriales de más alta productividad se paguen salarios mayores que en aquellas con menor desarrollo tecnológico. De esta expectativa pudo participar un sector de la burocracia sindical, pero en realidad fué distinta; en el período 1966-68 el bloque salarial perjudicó tanto a unos como a otros, acentuando la homogeneidad de la clase obrera como grupo explotado por el capital (15). Al cumplirse los dos años de la Revolución argentina ninguna fracción dentro de los trabajadores podía ser computada como soporte objetivo de la coalición con que el capital monopolista buscaba fundar su hegemonía.

Sin embargo, en junio de 1966, al ser derrocado el gobierno legal, la burocracia sindical no ocultó un prudente entusiasmo. "El movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder -dice una declaración de la CGT del 29 de ese mes- constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país". Los primeros pasos del nuevo gobierno parecen incluso, satisfacer algunas de sus esperanzas de coparticipar de la situación política creada, confirmando la impresión de que podrían ser reconstruidos los lazos -rotos desde 1955- entre burocracia sindical y Fuerzas Armadas.

Ese clima duró poco, sin embargo. La primera ofensiva brutal descargada por los militares en el poder tendió a dismantelar drásticamente las zonas de "ineficiencia" del sistema económico: trabajo en los puertos, ferrocarriles, industria azucarera tucumana. El golpe, aún era selectivo. La burocracia sindical trató de mantener las negociaciones, especulando con la posibilidad de ganar para sí a los sectores "nacionalistas" del elenco gubernamental y de las Fuerzas Armadas. Pero la designación de Krieger Vasena como ministro de Economía, a fines de 1966, desvanece todos los sueños: la presencia de ese gerente de los monopolios como arquitecto del plan económico de la Revolución Argentina, confirma que las Fuerzas Armadas han decidido transformarse en sostén del neocapitalismo dependiente.

En marzo de 1967 la CGT se rinde frente a la fuerza militar y levanta un paro general de 48 horas. Pocos días después recibe el golpe de gracia: Krieger Vasena liquida por dos años las convenciones colectivas de trabajo, estableciendo que durante ese período será el Estado quien fije los ingresos de los asalariados. La burocracia sindical pierde así toda influencia en el mercado de trabajo, viéndose

compelida a ocuparse solamente de cuestiones mutuales o asistenciales. El arma poderosa que significaba discutir cada año los salarios y las condiciones de trabajo es quitada de sus manos.

A partir de ese momento y hasta la crisis social y política de 1969-70, la burocracia sindical, doblegada por el poder, se repliega. Un sector, el vandorista, se aísla de gobierno, pero no lo combate. Otro, el llamado participacionista, insiste en mantener lazos con las Fuerzas Armadas, a partir del supuesto de que éstas pueden ser aisladas del establishment. La pretensión resultó absolutamente vana. Entre 1966 y 1969 la homogeneidad de la coalición Fuerzas Armadas-establishment fue casi perfecta y el papel adjudicado a la burocracia sindical era el de la subordinación: en la medida en que mantuviera la desmovilización de los trabajadores podía obtener, como categoría, concesiones aisladas, frutos de la corrupción que el poder prodiga.

Hasta 1969, en que el proceso sufrió un viraje, la burocracia sindical fue, pasivamente, un instrumento del plan de los monopolios. Como la burguesía media, con la que ha fusionado su proyecto político, fué forzada al repliegue. Si en 1966 el total de jornadas perdidas por conflictos de trabajo fué de 1.912.826 (de los cuales 1.542.933 lo fueron en los seis primeros meses), en 1967 la cifra descendió a 244.844 jornadas y en 1968 a algo más de 23.500, el valor más bajo desde 1956.

Sólo el debilitamiento del poder y la crisis política posterior al Cordobazo, que tenderán a aislar al establishment de las Fuerzas Armadas y a rehabilitar el peso de los partidos políticos, y con él la influencia del viejo capitalismo urbano y rural, alentará nuevamente a la burocracia sindical. Para obtener un grado de consenso que ayude a dar salida a la crisis de 1970, cuando la violencia "pura" se había mostrado insuficiente como garantía de desmovilización, la burocracia sindical es nuevamente convocada. Rota la coraza de coerción con que los militares habían protegido la hegemonía del capital monopolista, las otras clases dominantes subordinadas entran en la mesa de negociaciones; deben ser aceptadas como partes.

A partir de allí crece otra vez la influencia política de la **burocracia sindical**, en tanto ella se transforma en el eje de coincidencias económico-sociales entre los representantes directos del capital nacional y los partidos políticos, expresadas en los sucesivos pactos programáticos entre la Confederación General Económica (CGE), la Confederación General del Trabajo y los principales partidos políticos. Esos pactos, en los que la burocracia sindical ha jugado un rol primordial,

expresan las expectativas de reingreso al poder de las clases propietarias subordinadas en 1966.

La burocracia sindical en la Argentina opera así su pasaje histórico de las posiciones del "reformismo obrero" a las de "reformismo burgués", insertándose explícitamente en el sistema del capital. Esta calificación que, en general, parece válida para el sindicalismo en casi todas partes tiene, en el proceso social argentino, aspectos particulares que deben ser destacados.

En primer lugar parece necesario agregar que se trata de una de las instituciones con mayor poder en la sociedad civil; un poder que hace valer en el espacio político a partir de su número, de su capacidad de convocatoria y de su riqueza de recursos económicos.

Además, ese poder se ha fundado sobre características muy precisas de la historia posterior al derrocamiento del nacionalismo popular en 1955:

- ◆ la burocracia sindical ha debido asumir, desde entonces, dos papeles: el clásico de negociación de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo
- ◆ y otro "sui generis", determinado por la proscripción del peronismo, que transformó a los sindicatos en los principales representantes políticos de la clase trabajadora.

Ambos papeles -uno, "político"; otro, "profesional"- sólo se separan abstractamente: las condiciones concretas de funcionamiento del aparato sindical entrelazan permanentemente ambas funciones, tornando a menudo, contradictorios a sus comportamientos.

Por un lado, "**profesionalmente**", debe justificar su condición de columna vertebral del nacionalismo popular en un proceso que busca la restauración en el poder.

En este andarivel peligroso que combina el diálogo con la oposición, aparece una determinación cuyo peso es decisivo para entender las actitudes de la burocracia sindical: la dependencia con relación al Estado, cualquiera que sea el bloque de fuerzas que lo controle.

El peso del Estado sobre la burocracia sindical es enorme y las armas legales para controlar sus pasos abarcan todos los grados: desde la intervención lisa y llana por funcionarios gubernamentales hasta el ahogo económico por el bloqueo de sus fondos. Un eje decisivo de la actividad de la burocracia sindical pasa, por lo tanto, a través de sus relaciones con el poder político, para impedir que éste ponga en marcha medidas "disciplinarias", económicas o administrativas.

Todo ello obliga a que la burocracia sindical despliegue siempre una estrategia tendiente a compartir el poder; esto es, que busque, más allá de sí misma y de sus componentes corporativos, coaliciones con otras fuerzas sociales. Pasado el llamado período de la "**resistencia peronista**", toda la trayectoria política de la burocracia sindical se estructura con el objetivo de terminar con el "aislamiento" abierto en 1955 y recuperar su influencia sobre el aparato estatal, a través de la búsqueda de coaliciones con otras fuerzas sociales. Un jalón de ese proceso es la restitución que, en 1961, el desarrollismo en el poder efectúa de la CGT, intervenida desde 1955, devolviéndole a los dirigentes gremiales parte del poder de regateo político del que habían sido despojados tras el derrocamiento de Perón.

Esa política de alianzas desplazada por la burocracia sindical marca una clara línea de tendencia. El "**modelo de sociedad**" y las medidas económico-sociales que propugna la CGT desde los años 60 hasta la actualidad, no difieren virtualmente de los reclamos del capital nacional, agrupado en la CGE. Un análisis de esas orientaciones nos llevaría a comprobar que el objetivo político de la burocracia sindical es recrear las condiciones que contribuyeron a la gestación de la coalición sobre la que se fundó el peronismo, a mediados de la década del 40: sus interlocutores principales para ese fin no pueden ser otros que los representantes del capital nacional y los grupos nacionalistas de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el "nacional desarrollismo" programático de la CGT supone algo más que un movimiento táctico o una decisión oportunista: es la forma específica en que la

burocracia sindical busca asumir la representación política de las masas peronistas; es su proyecto histórico de largo plazo el modo de su inserción en la política de poder. Todo ello, claro está, de manera insanablemente más mediocre que en 1945: ni esta burguesía es la de entonces, ni estas Fuerzas Armadas son las de entonces; ni esta burocracia sindical está inspirada en el reformismo movilizador de los dirigentes gremiales de la década del 40.

El proyecto hegemónico del capital monopolista no es el mismo que posee la burocracia sindical, ni siquiera por parte de quienes fueron llamados "participacionistas" y buscaron permanentemente la negociación con Onganía.

Sin embargo, es un hecho que alentaron el golpe de 1966 y que se rindieron en la etapa más dura de la Revolución argentina, sin movilizar consecuentemente sus fuerzas. **¿Por qué es la complicidad con un proyecto que no compartían?** Las razones de diverso nivel, ilustran el complejo papel que la burocracia sindical cumple en la sociedad argentina.

◆ Desde el punto de vista de sus proyectos políticos a largo plazo ya descriptos, un elemento importante para explicar la tregua concedida es el carácter militar del gobierno de Onganía. Para el nacional-desarrollismo de los sindicatos, las Fuerzas Armadas constituyen sus principales aliados; los copartícipes con quienes se busca negociar toda propuesta tendiente a reconstruir la coalición gobernante entre 1946 y 1955.

◆ Otro elemento es la dependencia que la burocracia sindical tiene frente a quienes controlan el poder político, a fin de asegurar su supervivencia como institución. Basta la modificación de un artículo de un reglamento, para que la riqueza económica de los sindicatos se desintegre. Quienquiera que esté en el poder puede lograr, siempre que lo controle efectivamente, alguna forma de "colaboración" de la burocracia sindical.

👉 Pero esto sería insuficiente, porque omitiría el análisis de algunos aspectos específicos de la complicada trama de relaciones que se establecen entre la burocracia sindical -considerada ahora en su dimensión "profesional"- y el capital monopolista en momentos en que este sector consolida su

hegemonía sobre el resto de las clases dominantes, subordinando a los sectores que la burocracia sindical estima como sus principales aliados políticos. El sindicalismo argentino, en tanto ha abandonado el "reformismo obrero" por el "reformismo burgués", ha integrado su suerte a la del capitalismo. El hecho de que, en el interior de esa elección, prefiera como garantía para sus intereses -no sólo sociales sino políticos- al modelo nacional-desarrollista de la burguesía media, que busca negociar la dependencia, no impide que esa actitud pueda ser relativizada coyunturalmente. Como la ofensiva hegemónica del capital monopolista arriba a su punto más alto, acorazada tras todo el peso del poder militar, importantes sectores de la burocracia sindical, especialmente los ligados a las grandes empresas, partiendo de lo que perciben como "solidez" casi invulnerable del proyecto neocapitalista, tratan de negociar por su cuenta a fin de obtener el mejor partido posible de la nueva situación. Si el capital monopolista hubiera ganado la carrera contra reloj planteada desde 1966 entre el "tiempo de acumulación" y el "tiempo de distribución" y hubiera podido, por lo tanto, introducir cuñas objetivas de diferenciación en el interior de la clase trabajadora, es altamente probable que la burocracia sindical se hubiera fragmentado también, a partir de la contraposición de dos modelos distintos de participación en el desarrollo capitalista.

Pero, cuando el conjunto de la clase trabajadora estalla en movilización contra el sistema y plantea, borrosamente, la construcción de una nueva oposición social, haciendo trastabillar el "milenario" que Onganía buscó construir a través de la coalición entre Fuerzas Armadas y establishment y obliga a un repliegue del capital monopolista en el plano político la burocracia sindical retoma sus proyectos originales. Desde ese momento, en conjunción con los empresarios de la CGE, subraya su autonomía frente al capital monopolista y se transforma en el núcleo social destinado a marcar los horizontes del reformismo rehabilitado tras la crisis de 1970:

Explícitamente desde entonces el programa económico-social conjunto de la CGE y la CGT unifica a todos los partidos y Fuerzas Armadas, como propuesta reformista tendiente a fortalecer el sistema político.

De retorno del fracaso hegemónico del capital monopolista, el sindicalismo es hoy el principal soporte para poner en marcha cualquier programa reformista de dependencia negociada entre el

capital monopolista y el capital nacional, cuyos actores sociales principales deberán ser los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical. El principal soporte, porque el acuerdo deberá basarse, ya no en una desmovilización de las masas a través de la violencia desnuda, sino en la posibilidad de controlar la movilización existente, a partir de instrumentar formas reformistas que permitan un mínimo consensual.

---

## 2.6 Los obstáculos para la "brasileización"

---

El eje de sentido de este análisis de la crisis argentina son las **contradicciones secundarias**, internas al capitalismo. La elección -ya ha sido señalado- no implica transmutar estos antagonismos en los principales en el nivel social, sino a marcar el peso predominante que los mismos efectivamente tienen aún en el espacio político.

Lo que interesa destacar es la capacidad de resistencia política que, a través de distintas fuerzas sociales, tiene en la Argentina el viejo capitalismo urbano y rural frente al proyecto hegemónico neodependiente.

La literatura económica, sociológica y política corriente sobre la dependencia en América Latina, tiende a enfatizar -casi siempre por la proximidad empírica que en relación a sus análisis teóricos tiene **el caso brasileño**- dos aspectos complementarios.

- ◆ Por un lado, la virtual desaparición, como fuerza con capacidad de iniciativa política, de la burguesía no monopolista.
- ◆ Por el otro, la disolución de los movimientos populistas.

Ninguna de esas dos proposiciones que, vistas por el historiador futuro pueden ser válidas, permiten explicar la coyuntura política argentina.

Las fuerzas polares que se enfrentan en la contradicción social principal no tienen una expresión política eficaz, y ese escenario está primordialmente ocupado por representantes de proyectos que, residuales desde el punto de vista del desarrollo económico-social, acumulan un enorme poder de veto político aunque no tengan similar fuerza para poner en práctica sus decisiones. **Este es el rasgo político que diferencia a la Argentina del resto de Latinoamérica, especialmente de los dos modelos "límite" que suelen utilizarse como punto de referencia para medir las relaciones entre las nuevas formas de dependencia imperialista y las fuerzas sociales locales: Perú y Brasil.**



El **caso brasileño** es el más interesante para intentar un sumario análisis comparativo. Como hemos señalado, la "**Revolución Brasileña**" de 1964 y la **Revolución Argentina de 1966** tienen puntos de partida similares: la **voluntad de establecer un sistema burocrático-autoritario para instrumentar un desarrollo de las relaciones capitalistas bajo la hegemonía de la burguesía monopolista.**

Sin embargo, a medida que el proceso fue desarrollándose en la Argentina, las dificultades para viabilizarlo aumentaron su intensidad hasta hacerlo fracasar políticamente. Si es cierto que la determinante de ese fracaso fue la resistencia activa de las clases populares, también lo es que **el principal beneficiario político de la crisis es el reformismo burgués, expresado en los partidos políticos y en la burocracia sindical** y sostenido en los límites que traza el proyecto posible de la burguesía no monopolista, económicamente a la defensiva pero políticamente a la ofensiva. (16)

Entre 1967 y 1968, al cumplirse el primer trienio del golpe de Estado dado por los militares brasileños, una crisis similar a la que estalla en la Argentina en 1970, se instala en el sistema político de ese país. El año 1968 es, en Brasil, un año de escalada en la ofensiva de los perjudicados por la nueva situación: grandes movilizaciones estudiantiles, extensión de las luchas obreras, primera aparición de la guerrilla y consolidación de toda la oposición civil en el Frente Amplio, una coalición en la que confluye todo el sistema de partidos, desde los comunistas hasta Carlos Lacerda, para jaquear al poder militar.



El desenlace de ese proceso será, sin embargo, el **fortalecimiento de la hegemonía del capital monopolista, a través de la consolidación de una oligarquía militar-industrial** que barre totalmente a la oposición.

La respuesta que las Fuerzas Armadas pudieron dar entonces a la ofensiva combinada de los políticos tradicionales y del movimiento obrero y estudiantil, consistió en galvanizar aún más el aparato autoritario y forzar la marcha en la realización de los planes económicos neodependientes. La decisión de volcar todo el peso de Estado a favor del modelo de capitalismo monopolístico dependiente, fue lo que permitió el llamado "milagro": a costa de cada vez más marginalidad y diferenciación social y económica, de concentración de la riqueza y aumento de la miseria relativa de las grandes masas populares, el sistema probó su dinamismo, mostrando que sus límites no se hallan en las leyes de la economía sino en los movimientos del sistema político. Si el capital monopolista dispone de Poder necesario para desbaratar las primeras resistencias y acelerar la marcha en lugar de detenerla, puede conseguir éxitos en sus metas desarrollistas.

**Esta decisión es la que no pudo implementarse en la Argentina: la crisis social y política de 1969-70 arrastrará a su caída al autoritarismo militar de Onganía y planteará, nuevamente, una situación de vacío hegemónico.**

Aunque la dirección causal puede ser discutida, es un hecho que la crisis política de 1970 aparece como punto de partida de un descenso en los indicadores de crecimiento económico que habían manifestado un alza sostenido durante el bienio anterior, en el cual, además, habían descendido

significativamente las tasas de inflación. Como ha sido señalado, "el plan Krieger Vasena lleva a la economía argentina a un punto en el que, dadas las situaciones estructurales que condicionaron aquella coyuntura, la única alternativa al desorden económico es la continuidad del plan. Sin embargo, dicha continuidad implicaba acentuar aún más ferozmente la explotación de la clase obrera y la pauperización de la pequeña burguesía el irritar más también la situación de parte de los sectores dominantes, especialmente la oligarquía terrateniente." (17)

Es decir, que en 1970 la opción dinámica para el sistema hubiera sido, desde la lógica económica, la continuidad del plan, pero esa lógica chocaba contra techos políticos y sociales que no involucraban solamente a las clases populares sino que abarcaban a sectores de la burguesía, lo suficientemente poderosos políticamente como para frustrar la hegemonía monopolista.

Pero ese poder de resistencia, que contribuyó a desbaratar el plan de Krieger Vasena y que desembarcó a Onganía del Estado tiene, a su vez, límites para revertir el proceso; límites económicos, sociales y políticos que dificultan, hasta tornarla improbable, una asimilación del tipo de hegemonía consolidada en el Perú por la revolución militar de 1968.

Entre junio de 1970, en que es derrocado Onganía, y marzo de 1971, en que toma el poder Lanusse, tiene lugar en la Argentina un paréntesis significativo: el breve período presidencial del general Levingston. El interés de ese lapso interno a la Revolución Argentina consiste en que, durante el mismo y a través del ministerio de Economía de Aldo Ferrer, el capital nacional llega al punto más alto, desde la caída de Perón en 1955, en sus intentos por influir sobre las decisiones del Estado.

Aunque finalmente fracasaron, Levingston-Ferrer buscaron poner en marcha un proyecto reformista que, en lo económico-social, aspiraba a asociar al capital nacional con el Estado. No se trataba de un proyecto nacionalista revolucionario de capitalismo de Estado, sino de una más módica "argentinización" de la economía, a través de la utilización del importante poder de compra del Estado y de una redistribución del crédito bancario que favoreciera a los empresarios nacionales.

La estructura de ese poder debía basarse en una coalición entre Fuerzas Armadas, burocracia sindical y la tecnocracia ligada a las organizaciones corporativas en que se agrupa el capital nacional, dejando fuera de proceso a los partidos políticos. Pero la clave para el funcionamiento de

ese bloque era que las Fuerzas Armadas aceptaran transformarse en el eje dinamizador de un proyecto reformista que revirtiera el proceso de extranjerización de la economía.

Desde el punto de vista de las formas, el modelo propuesto recogía las iniciativas primeras de la Revolución Argentina, en tanto marginaba al sistema de partidos y tendía a mantener desmovilizados a los sectores populares. Pero su contenido era diferente: así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje del proyecto neodependiente, debían transformarse ahora en principal sostén de un proceso tendiente a permitir que la burguesía agraria y el capital nacional ganaran posiciones, en detrimento del capital monopolista, que debía dar un paso al costado y, en algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas que lo perjudicaban.

Un mes antes de ser derrocado, el gobierno adoptó decisiones que contrariaban concretos intereses de las grandes compañías petroleras extranjeras y de empresas como Bunge y Born y Deltec. Estas medidas que efectivamente indicaban un desplazamiento en el interior de las clases dominantes a favor del capital nacional, no impidieron, sino en todo caso aceleraron, la crisis política.

El estado de movilización de las clases populares, en ascenso desde 1969, creció en intensidad cuando la economía, a fines de 1970, entraba en un nuevo período recesivo e inflacionario. El sistema de partidos, por su parte, acentuó su ofensiva contra un modelo político que lo excluía.

En medio de esa crisis de legitimidad, las Fuerzas Armadas cargaban ya con un desgaste suficiente como para que pudieran tener éxito los planteos tendientes a inducirlos para que se pusieran a la cabeza del proyecto reformista elaborado por la tecnocracia ligada al capitalismo nacional. La presencia de masas movilizadas había llevado ya a la cúpula militar a diseñar otro intento de desemboque para la crisis: la reconciliación con los partidos políticos y la burocracia sindical.

El tránsito fugaz de Levingston tiene similitud con el episodio que protagonizara, en Brasil, el general Albuquerque Lima, líder de la corriente llamada nacionalista del Ejército, finamente desalojado de toda participación en el poder. La diferencia está en el proceso posterior al desenlace infeliz para las corrientes nacionalistas: en Brasil, del fracaso de ese intento resurgirá con más bríos el proyecto neodependiente; en la Argentina se irá, trabajosamente, pactando un nuevo empate entre las clases dominantes.

---

## 2.7 Las salidas para la crisis

---

El vacío consecuente al fracaso del proyecto hegemónico del capital monopolista puso desde entonces en el primer plano las contradicciones internas del sistema capitalista dependiente, pero sobre el fondo de un crecimiento sostenido de la movilización social de las clases populares en la que el proletariado industrial introduce, con una fuerza inédita en la Argentina, la problemática socialista.



Se trata, pues, de la crisis de un modelo hegemónico burgués, ante la presencia de una creciente movilización popular con fuertes elementos socialistas.

Es esta movilización la que provoca las **dos respuestas orgánicas** con las que las clases propietarias intentan reequilibrar el sistema político.

- ◆ Una respuesta es el **transformismo** y está ubicada a la "derecha" del sistema.
- ◆ Otra es el **reformismo**, colocada a la "izquierda".

Ambas, aunque enfrentadas, pueden coexistir en un acuerdo que no significa homogeneidad absoluta, sino **integración conflictiva entre "oficialismo y oposición"** en el interior de un sistema político unificado.

El **transformismo** tiene como eje propulsor a las **Fuerzas Armadas**. El **reformismo**, a las direcciones de los grandes **partidos políticos** y a la **burocracia sindical**.

Pero lo que interesa marcar es que el corte principal que separa a ambos proyectos no es el contenido de sus propuestas económico-sociales sino el de sus propuestas políticas.

Concretamente, el punto de ruptura entre **transformismo y reformismo** se refiere al control de la movilización, aunque este problema político sea matriz de diferenciaciones subsecuentes en otros

planos.

El derrocamiento de Levingston inaugura la **tercera etapa** de la Revolución Argentina, cuyo signo es la dura negociación a fin de reconstruir las bases sociales del Poder, debilitado por la crisis política que sucede a las conmociones inauguradas por el Cordobazo.

Esta tercera etapa se caracteriza por una inversión, propuesta por las Fuerzas Armadas, de la problemática inicial: ya no se planteará que la solución política habrá de surgir como consecuencia natural, a largo plazo, del éxito de un modelo económico, sea éste el del capital monopolista (Onganía-Krieger Vasena) o el de la asociación del Estado con el capital nacional (Levingston-Ferrer). El orden de la secuencia se alterará en los proyectos oficiales: sólo la obtención de un mínimo de legitimidad podrá garantizar una solución económica. El objetivo es reconstruir el poder del Estado para todas las fracciones de las clases dominantes, otorgándole al sistema político el máximo posible de consenso, con el reaseguro de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar a través de la violencia, el control de la movilización. Este es el sentido del "Gran Acuerdo Nacional" proyectado, en nombre de la seguridad del sistema, por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El modelo económico pasa a segundo plano frente al modelo político: interesa la seguridad, a través de "unir a los adversarios y combatir a los enemigos", por encima del desarrollo.

La doctrina militar disocia sus elementos claves y el período que arranca en abril de 1971 no puede identificarse con una orientación precisa en lo económico que vaya más allá de cierto pragmatismo básico. La disolución del ministerio de Economía es casi simbólica: parece refrendar que ese campo es un terreno abierto para la capacidad de presión de las clases y fracciones de clase.

La política ocupa el "**puesto de mando**"; el tema de la legitimidad de poder aparece como central, y la "reconciliación" para obtener bases de consenso es planteada como objetivo supremo.

El elemento indispensable para la construcción de ese mínimo consensual que reconstruya la integridad del Estado, es la **articulación de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical**. El carácter de ese acuerdo y el contenido de las fuerzas sociales convocadas para ponerlo en práctica, determina, de hecho, un repliegue político de capital monopolista, que debe aceptar un pacto con el capital nacional en el espacio que menos

controla, dada su virtual carencia de representación política partidaria directa: el de la escena electoral y parlamentaria.

Esta salida negociada, si no significa la derrota del capital monopolista, en tanto el desenvolvimiento de la economía sigue un rumbo relativamente autónomo que le permite acentuar su predominio en ese nivel, importa, en sentido contrario, la mayor victoria que, dadas las relaciones de fuerza políticas y el carácter subordinado de sus posiciones en el sistema económico pueden conseguir los sectores dominantes no monopolistas. Esto es, reubicarse en el poder político, aun cuando su fuerza real solo alcance para restablecer una situación de empate y no para instrumentar un proyecto hegemónico alternativo capaz de potenciar un modelo económico dinámico.

La burguesía monopolista, al ser desautorizado en corto plazo el "modelo brasileño" de hegemonía, queda descolocada ahora en el abanico de posibilidades políticas y debe sacrificar su presencia antagónica a favor de conseguir una mínima consolidación del sistema de poder, que había sido virtualmente vaciado desde 1969 en adelante. Incapacitada para imponer su modelo, la reconciliación propuesta se le aparece como una menor que, de todos modos, no llega a cuestionar su predominio en el mercado económico, aunque deba admitir la competencia con los otros sectores de la burguesía en el mercado político del sistema de partidos.

Todo el proceso protagonizado por las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical tras la propuesta lanzada desde el Estado para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional, tiende a afirmar, como tendencia, los presupuestos básicos de esta tregua que las clases dominantes deben pactar para salir de la crisis política y colocarse en mejores condiciones para enfrentar la crisis social. Un problema, el de los métodos más idóneos para el control de la movilización, sobre el que se impostan luego determinaciones de clase, marca la cuota mayor de dificultades que se traduce, incluso, en choques violentos, a partir de las discrepancias, que, como respuestas orgánicas a la situación, aportan el reformismo y el transformismo.

El **transformismo** es la ideología de las Fuerzas Armadas; la fórmula político-social que asume, en esta etapa de la crisis argentina, la doctrina de la seguridad. Es el modo "realista de la contra-insurgencia". Definimos en general al transformismo como un camino de salida para una situación de crisis orgánica en el que una de las fracciones dominantes propone un programa de mantenimiento

del Orden que incluya la absorción de representantes de fuerzas dominadas. Esta absorción modifica las formas políticas de la dominación, pero no altera sus contenidos económico-sociales. Aunque utilice cuadros reformistas para realizar sus fines, un sistema de tipo transformista intenta la superación de la crisis a través del rechazo de toda reforma orgánica.

En el caso argentino actual este proceso se especifica. El transformismo de las Fuerzas Armadas, como acuerdo con la burocracia sindical y los partidos políticos, parece dispuesto a aceptar ciertas reformas económico-sociales. Sus "límites de tolerancia" están básicamente en lo político, en el control de la movilización popular, en el manejo de la seguridad. Las garantías que las Fuerzas Armadas exigían de las otras partes convocadas para el acuerdo, tuvieron un punto de arranque "máximo" -la candidatura de Lanusse a la presidencia constitucional- y parece tener ahora un punto de llegada "mínimo": la coparticipación en el poder, el control sobre la movilización a través de la violencia, la responsabilidad indelegable de garantizar la seguridad contra el "enemigo interior". Es a partir de esto y no de la adhesión, como lo fuera en 1966, a un modelo económico explícito, que las Fuerzas Armadas se transforman en representantes indirectos del mejor programa posible, en las condiciones actuales, para los monopolios; en el estrato protector que éstos tienen si el resto de las clases dominantes intenta aprovechar la movilización popular para recuperar posiciones perdidas en el sistema económico.

El **reformismo**, sustentado en los partidos políticos y en la burocracia sindical, expresa, en cambio, más directamente intereses económico-sociales. Su contenido es maximizar las metas del capital nacional frente al modelo de neodependencia, a través de una asociación con el Estado que ponga en marcha un programa nacional-desarrollista y que permita negociar la dependencia. Su plataforma es la de los acuerdos entre la CGE y la CGT: los puntos allí incluidos unifican a las burocracias políticas de los grandes partidos.

En estas condiciones se llega a las elecciones del 11 de marzo. Ese día, la fuerza del número se transforma en un hecho cualitativo: la multitudinaria votación a la coalición hegemónizada por el peronismo pone en cuestión también al "punto de llegada mínimo", aceptado por el transformismo militar tras haber asimilado el irremediable fracaso de los intentos de "constitucionalizar" la presidencia de Lanusse. Esta puesta en cuestión, en tanto paraliza la iniciativa política desplegada hasta entonces por las Fuerzas Armadas, significa el bloqueo más significativo sufrido por el

proyecto hegemónico del capital monopolista, al sancionar su derrota en manos de la peor coalición posible para sus intereses, en las condiciones presentes.

Claramente, el mejor resultado para el capital monopolista de unas elecciones a las que había sido empujado, era lograr una fragmentación del poder que obligara a una negociación permanente entre reformismo (dividido casi por mitades entre oficialismo y oposición) y transformismo, aun cuando el primero mantuviera formalmente el control del sistema político. Esto es, una versión institucionalizada del Gran Acuerdo Nacional, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. El aluvión de votos desbarató esas intenciones, planteando una ruptura grave de la continuidad proyectada.

Los comicios, dado el carácter rotundo del pronunciamiento, dejan virtualmente sin estrategia al transformismo y en un vacío político al capital monopolista. El bloque a instalarse pasa a ser liderado por fuerzas representativas de la burguesía no monopolista, básicamente las burocracias políticas, la burocracia sindical y las organizaciones representativas directas de los intereses del capitalismo nacional. En su interior, con una capacidad organizativa menor, pero expresando con nitidez las expectativas más profundas de la movilización popular posterior a 1969, coexisten tendencias socialistas, radicadas básicamente en la juventud y en el sindicalismo de oposición.

Finalmente, a la derecha, pero todavía en el exterior del sistema, expectantes, sin un liderazgo claro, se ubican las Fuerzas Armadas, envueltas en el fracaso político de su grupo dirigente, pero hasta ahora incapaces de revertir ese marginamiento provocado por la derrota.

Este gobierno, con contradicciones en su interior entre quienes postulan el "capitalismo nacional", quienes reclaman la movilización para el socialismo y aun aquellos otros que actúan como cuñas larvadas del capital monopolista; que no goza, además, de un sostén activo por parte de las Fuerzas Armadas sino de un consentimiento sólo pasivo, resultado de una derrota que no ha sido elaborada, necesita transformarse rápidamente en poder, esto es, en alternativa hegemónica tras el fracaso del capital monopolista.

Es en este punto donde comienza a plantearse, como problema central, el de la capacidad de la coalición triunfante para poner en marcha una política de reformas orgánicas que pueda revertir el avanzado proceso de dependencia económica, cuando hoy, a diferencia de lo que sucedía en la

década del 40, ésta se asienta básicamente en el dominio desde el interior de la estructura productiva más avanzada.

La debilidad económica frente al capital monopolista de las clases que le dan contenido al liderazgo del nuevo proceso sólo podría ser compensada por una efectiva y profunda asociación con las Fuerzas Armadas que se resuelva en un proyecto de capitalismo de Estado, algo que en las actuales condiciones de monopolización de la economía argentina se acercaría peligrosamente -para la burguesía local y para las Fuerzas Armadas preocupadas por el "enemigo interior"- a una vía no capitalista de desarrollo.

Si el reformismo nacionalista fracasara en la consolidación de un proyecto hegemónico basado en la asociación entre el Estado y la burguesía no monopolista, o si limitara sus ambiciones a una mera negociación de la dependencia aprovechando las nuevas condiciones del mercado mundial, el retorno al empate y la continuidad de la situación de crisis social y política resultaría la previsión más verosímil. Mucho más, en tanto el capitalismo monopolista, que mantendría su predominio en el nivel económico forzaría nuevamente la búsqueda de la hegemonía en el bloque de poder.

Para las clases populares, el proletariado en primer lugar, el triunfo electoral de marzo significa el pasaje a una nueva etapa de lucha, que libraré, obviamente, en condiciones mucho más favorables que las existentes desde 1955. Cualquier recrudecimiento de la crisis tiene, ahora, un dato suplementario inexistente a mediados de los años 60: la presencia de un nuevo movimiento social que, desde diferentes tiendas organizativas, pero básicamente ahora desde el interior del propio sistema político, plantea una redefinición de las salidas políticas en términos de su adecuación con la contradicción social básica generada por el desarrollo del capitalismo monopolista dependiente en la Argentina.

El cuerpo fundamental de este artículo fue pensado y redactado antes de las elecciones del 11 de marzo. Las líneas básicas del análisis se mantienen inalteradas y ninguna de las conclusiones debe ser, a mi juicio, reformada. La estrepitosa derrota política sufrida por el capital monopolista seis años después de su ascenso triunfal al poder en andas de la Revolución Argentina, ha abierto una nueva fase en la lucha de clases que coloca, por primera vez en décadas, nuevamente a las fuerzas populares ante la posibilidad de revertir a su favor un proceso; de transformar una situación defensiva, primero en equilibrio y luego en ofensiva. Pero ese proceso recién se abre: la avalancha de votos populares no sólo no alcanza por sí sola para tomar el poder sino que tampoco permite excluir del gobierno a fuerzas antipopulares que actúan en su propio interior, las que intentarán ahora negociar la dependencia con el capital monopolista. El 11 de marzo el pueblo dispuso los funerales del proyecto más coherente elaborado por el capital monopolista, al derrocar a la camarilla militar que, claramente desde 1966, se había transformado en principal soporte político de la dependencia. Este es un hecho histórico, pero a partir de él otra historia debe nacer aún.

1 **Antonio Gramsci**, Notas sobre Maquiavelo sobre política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972, págs. 71 y 72. La expresión acerca de que deben transformarse en partido, no tiene que ser tomada en sentido estricto: para Gramsci, un gran diario, por ejemplo, puede ser calificado como "partido" o "fracción de partido". Se trata de expresiones orgánicas que, a partir de intereses de clase, plantean las cuestiones en conflicto no sólo sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal."

2 **Karl Marx**, **Elementos fundamentales para la crítica de la economía política**, tomo 1,

Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, pág. 204.

3 **Gramsci, op. cit., pág. 71.** La expresión la toma casi literalmente del Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política, de Marx.

4 **Mao Tse Tung, Sobre la contradicción,** en Obras Escogidas, tomo 1 pág. 356.

5 **Samir Amin, L'Accumulation a l'echelle mondiale,** París, 1970, pág. 34.

6 **Ruy Mauro Marini, "Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora"** en Sociedad y Desarrollo, N° 1, Santiago de Chile, 1972, pág. 37.

7 **Amin, op. cit. pág. 34.**

8 **Gramsci, op. cit., pág. 76.**

9 La definición de **Lenin** sobre "situación revolucionaria", en **Obras Completas**, tomo XXI, pág. 211/12, Buenos Aires, 1960.

10 **Torcuato Di Tella, "Inmovilidad o coexistencia en la Argentina"**, en James Petras y Maurice Zeitlin, América Latina: ¿Reforma o Revolución?, tomo 1, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970, pág. 205.

11 **Política Económica Argentina**, Buenos Aires, 1968, pág. 35.

12 **Osiris Villegas, Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional**, Buenos Aires, 1969, pág. 136.

13 El **discurso del general Juan N. Iavicoli**, pronunciado en la Conferencia de Ejércitos Americanos reunida en Buenos Aires en noviembre de 1966, puede leerse en Clarín del 3 de noviembre de 1966.

14 Columna de **Mariano Grondona**, en **Primera Plana** del 12 de diciembre de 1967.

15 Cf. **Mónica Peralta Ramos, Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina**, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, págs. 62 y 183.

16 En realidad, desde los años 60 la ofensiva del capital monopolista ha tendido, con éxito, a integrar subordinadamente a la burguesía nacional en su circuito económico o condenarla a su desaparición. De acuerdo con estadísticas oficiales, más de once mil empresas quebraron en los últimos cinco años, debilitando el peso económico del capital nacional. Pero lo que interesa destacar, más allá de las habituales discusiones sobre la extinción de la burguesía nacional en la Argentina, es lo siguiente, dentro de la línea de razonamiento de estas notas: a) la existencia de una diferenciación contradictoria entre esos grupos y la burguesía monopolista, basada en intereses; b) la capacidad, en esa relación conflictiva, de oponer resistencias, de negociar transacciones. Es que, por encima de su peso económico (mucho mayor que el de similares fracciones de clase en otros países latinoamericanos), vale su peso social. Según la clasificación del Censo Industrial 1963-64, las empresas de las ramas industriales "mediana y escasamente concentradas", en las que predomina abiertamente el capital nacional y cuyo destino se liga al del mercado interno, producían el 43,6% de los bienes industriales y ocupaban el 57,7% del total de la mano de obra. Este último dato es muy importante en términos de peso social: puede ayudar a explicar la relación que la burocracia sindical mantiene con las organizaciones profesionales del empresariado nacional y los reiterados acuerdos a que han llegado para reclamar en conjunto modificaciones a la política estatal.

17 **Oscar Braun y Ricardo Kesselman, Argentina 1971: estancamiento estructural y crisis de coyuntura**, Centro de Estudios de Economía Política, Buenos Aires, 1971, pág. 1 (véase pág. 45 del presente volumen).

## Resolución del Empate Hegemónico por Miguel Angel Ferraro

La última dictadura militar Argentina generó un proceso regresivo de reestructuración social, que afectó a todas las clases sociales y forjó la constitución de nuevas identidades sociales políticas e ideológicas. Ya nada fue igual después del golpe militar de 1976, las políticas llevadas a cabo tendieron a fortalecer las bases de dominación, a fragmentar las clases subalternas, a individualizar las conductas sociales, a rearticular las formas constitutivas de la sociedad.

En este sentido podría decirse que el poder dictatorial no actuó solamente en lo represivo, sino también, como formador de consenso y más aún, transformó la estructura productiva del país.

Para llevar adelante esta estrategia de poder fue necesario desarrollar una política represiva y económica de "tierra arrasada"(Leer Walsh).

La Argentina en la década de los sesenta y mitad de los setenta padecía una crisis política protagonizada por la ingobernabilidad de las masas y posibilitada por la indefinición hegemónica de los sectores dominantes en los ámbitos político, económico y cultural lo que Juan Carlos Portantiero denominó "El empate hegemónico".

En las clases dominantes podemos describir la heterogeneidad de este sector, representada por una burguesía nacional orientada al mercado interno y participe de una alianza con las clases subalternas (proletariado industrial), grandes productores industriales y agrarios ligados a la exportación, fracciones situadas en el campo de la circulación del capital, presentaban el cuadro de una heterogeneidad conflictiva.

El intento de unificación por arriba se desarrolló en un triple movimiento de concentración, hegemonía y representación. Concentración del capital; hegemonía de la tendencia al predominio del sector financiero constituyó la forma genérica de articular intereses; y representación de la defensa del conjunto de los intereses de los grandes sectores propietarios por parte de la dictadura militar.

La desindustrialización implementada a partir de la apertura económica redujo a los obreros industriales, la clausura sindical, bloqueó sus formas de expresión social y política. El crecimiento del

trabajo no asalariado, (cuentapropismo), la terciarización, que multiplicó la presencia de los empleados, **debilitaron el poder de los trabajadores.**

El proceso militar generalizó los resortes de poder de la sociedad disciplinaria, los mecanismos represivos basados en la sospecha personal generalizada e instituyó una cultura del miedo en la que el poder ejerció el máximo de control individualizador y fragmentador de las clases subordinadas.

El proceso militar de 1976 a partir de sus políticas represivas y económicas permite la resolución del empate hegemónico e inaugura un proceso regresivo para las clases subalternas, que es la base para las políticas neoliberales que se aplicaron posteriormente en la Argentina.

U3

### Tema 3 Democracia y dictadura en América Latina en la década del '70 [1] " Perry Anderson

En primer lugar, tendré que pedir su indulgencia, tanto por la forma como por la substancia de esta charla, ya que, por un lado, hablo muy mal castellano y, por el otro, las conclusiones de la reflexión que voy a desarrollar me resultan muy desagradables.

Si hace diez años hubiéramos mirado el mapa político de América del Sur habríamos advertido la presencia de dictaduras militares en todos los países del continente, salvo en Venezuela y Colombia. Diez años más tarde, encontramos gobiernos civiles en todos los países, excepto en Chile y Paraguay; evidentemente un cambio espectacular. Pero, ¿cuál es su significado histórico? Existe una vasta literatura al respecto y me parece que hay dos temas que han adquirido algo así como una fuerza consensual en la mayor parte de esta literatura. La primera tesis indicaría que los regímenes militares han dejado el poder, o han sido expulsados de la escena política, porque fracasaron. Después de sus crímenes y de los disparates cometidos en el ejercicio del poder, las dictaduras pretorianas han caído en un profundo descrédito en la América del Sur. Segunda idea: la democracia que ha sobrevenido después de este decenio de dictaduras represente la victoria del nuevo conjunto de valores políticos en el continente; son los valores de la concertación y el pluralismo, del respeto de las leyes, configurándose así una nueva moderación y civilidad. Un gran economista político de los EE. UU., Albert Hirschman, ha teorizado al respecto diciendo más o menos que la democracia en

América Latina, hoy, debe ser concebido no en términos de las condiciones socioeconómicas, sino de las actitudes políticas con respecto a la democracia (lo que él denomina “una renuncia a las certezas”) tanto sobre la convicción ideológica como sobre su viabilidad política.

También puede observarse una postura no tan distante en la propia izquierda latinoamericana, sintetizada tal vez en el famoso lema de Norberto Lechner (“de la revolución a la democracia”) o, quizás, en el título del mexicano Enrique Krause: “**Democracia sin adjetivos**”.

Hoy me propongo desarrollar una reflexión algo crítica respecto de estas dos concepciones tan difundidas; vale decir, la dictadura concebida como fracaso y la democracia concebida como conjunto de normas y discursos. Y quiero comenzar sugiriendo un enfoque un poco heterodoxo, para averiguar los orígenes de las dictaduras militares en sí mismas, un enfoque que pueda ayudarnos a entender sus desenlaces. Ahora, si consideramos la época que va más o menos desde la caída de Allende hasta la guerra de las Malvinas, podemos observar una paradoja en términos de la literatura más antigua sobre la democracia, una literatura que –en contraste con la posición de Hirschman– subraya las condiciones socioeconómicas para el establecimiento de una democracia. De acuerdo con los criterios de esta literatura, uno esperaría que, allí donde el desarrollo capitalista fuera más avanzado (en términos de grado de acumulación, implantación de industrias modernas, tasas de urbanización, niveles de alfabetismo, tradiciones culturales, etc.), encontraríamos regímenes políticos más representativos, es decir, democracia presidenciales o constitucionales con libertades cívicas y pluralidad de partidos, mientras que allí donde hay sociedades más atrasadas socialmente, con menos preparación cultural y una industrialización más débil o más reciente, probablemente encontraríamos, por el contrario, regímenes más rudimentarios o represivos, tiranías policíacas o militares. Esta perspectiva es plausible en sí misma si uno la piensa desde la perspectiva del capitalismo metropolitano, donde (por ejemplo, en los catorce o quince países de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica Europea –OCDE–), hay una correlación altísima entre el grado de desarrollo económico y la estabilidad de la democracia participativa.

 Sin embargo, en América del Sur, entre 1973 y 1982, esta correlación aparece invertida. En esta región, las dictaduras más sangrientas y represivas se encontraron en las sociedades social y económicamente más desarrolladas del continente, esto es en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil,

mientras que las democracias más o menos precarias que se podrían encontrar se localizaban en sociedades menos avanzadas en su parque industrial o configuración, esto es, inicialmente, sólo en Venezuela y Colombia. Después fue en Ecuador y Perú que se inició la paulatina evolución hacia una democratización del dominio militar a fines de la década del '70.

Mi primera pregunta es la siguiente: **¿Cómo podría explicarse esta disociación y recombinación sorprendente de desarrollo socioeconómico y libertad política en América de Sur?** Se trata de un problema obviamente complejo cuya causalidad debe ser sobre-determinada y voy a sugerir solamente un hilo conductor heurístico que, seguramente, tendrá que ser afinado y enriquecido ulteriormente. La hipótesis que deseo sugerir es que la clave para comprender la paradoja cartográfica de la década del '70 tal vez se encuentre en la correlación de dos fuerzas sociales básicas en esta sociedad. Es decir, por un lado, la clase terrateniente, el capital agrario en el campo, y, por el otro, la clase obrera o la mano de obra en las ciudades.

Subrayo la heterodoxia de este enfoque porque la relación entre estas dos clases es –por decirlo así– diagonal. No es la relación –más lógica– entre capital agrario y trabajo agrario, o por otro lado, entre el capital industrial y el trabajo industrial. No niego la importancia de estos otros ejes, pero el que he indicado me parece más crucial para estos años.

Permítanme ahora explicar qué fue lo que inicialmente me incitó a adoptar esta perspectiva: fue una meditación –en 1980– sobre el enigma de la democracia venezolana. En aquel momento, Venezuela era el país menos típico del continente, se podría decir.



He mencionado **Venezuela** entre otros países andinos, cuando en realidad constituye un caso único en muchos sentidos, pues en Venezuela –y sólo allí– se dio el caso de una democracia representativa plenamente estabilizada, es decir con treinta años de alternancia regular de partidos competitivos en el poder, basada en el sufragio universal efectivo y en una participación electoral masiva. Esta experiencia fue mucho más larga, claro, que la democracia en Perú o Ecuador, y mucho más profunda que en Colombia, donde –en la década del '70– los niveles de votación no

superaron en mucho el 30 o 40%. En Venezuela, en cambio, un 80% de la población acude a las urnas y los dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI –que responden respectivamente a una orientación social-democrática y social cristiana– cuentan cada uno con más de un millón de afiliados, en una población de no más de 14 millones, es decir que presentan niveles de implantación y organización partidaria comparables a los que exhibe la social-democracia alemana o la democracia cristiana italiana actual. Ahora, ¿cómo se explica este éxito político inhabitual de la democracia participativa en Venezuela? Hay una respuesta muy convencional: la riqueza petrolera. La idea más difundida -incluso en Venezuela– es que la riqueza petrolera ha posibilitado una incorporación pacífica de las masas a las instituciones políticas, masas que –en otra parte y otras condiciones– habrían sido demasiado peligrosas; es decir, el esquema general es la idea de que el petróleo ha permitido una especie de captación de sectores populares. Sin embargo, si bien es evidente que la renta petrolera ha sido una condición necesaria de la democracia venezolana, no es del todo claro que haya sido una condición suficiente. Es necesario no exagerar o aislar este factor, ya que, evidentemente, hay otras sociedades con niveles aún mayores de renta petrolera que no muestran empero la más mínima propensión al establecimiento de una democracia representativa – como, por ejemplo, Kuwait o Libia– aunque sí han manifestado una cierta capacidad para redistribuir efectivamente la renta petrolera.

Por otro lado, el 20% de la población venezolana más pobre no recibe más que el 3% del ingreso nacional, aproximadamente, porcentaje éste que no ha evolucionado mucho en los últimos veinte años. En muchos sentidos, Venezuela constituye hoy en día una sociedad más cercana al modelo de una sociedad subdesarrollada tropical, que al que han adoptado las que pueblan la cuenca del Río de la Plata.

### ¿Cómo ha logrado, entonces, una democracia tan estable?

La respuesta que voy a sugerir se divide en dos partes. El **primer factor** de este éxito ha sido, creo, la debilidad de la clase terrateniente tradicional de Venezuela. En casi toda América Latina, los hacendados han sido tradicionalmente el baluarte del conservadurismo político. Pero en Venezuela, por una serie de razones históricas (la elite colonial fue diezmada por las luchas de la independencia,

guerras civiles y disturbios sociales –de efectos devastadores– a mediados del siglo XIX, un patrón muy discontinuo de la base física del cultivo del cacao y café y la cría de ganado, una tiranía muy regionalista y personalista de Juan Vicente Gómez en los albores del siglo XX –perjudicial para cualquier dominio colectivo de clase– y también, sobre todo, el auge petrolero de las décadas del '20 y del '30, que coincidió con la gran depresión), el rol de la tierra como fuente de capital e inversión fue marginalizado. De ahí que la consecuencia acumulativa de los factores apuntados haya provocado la ausencia en Venezuela de una oligarquía terrateniente en lo que va del siglo.

Pero hay una **segunda** parte en la solución del enigma, y es la debilidad simétrica, también, de la clase obrera. El núcleo histórico de la clase obrera venezolana ha sido el proletariado petrolero del lago de Maracaibo, que ha jugado un papel muy importante en el derrocamiento de los regímenes militares que sucedieron a la tiranía de Gómez. Pero este proletariado constituye un grupo numéricamente muy limitado en una industria sumamente capitalizada. En los años '70, alrededor del 75% de los ingresos del Estado (y un 90% de las exportaciones) eran generados por un 3% de la mano de obra venezolana. La consecuencia sociológica ha sido la ausencia de cualquier concentración masiva de obreros en esta industria, si bien sus salarios son relativamente altos y la industria ha permitido el crecimiento de sectores de servicios vastísimos alrededor de su núcleo, generando así capas muy amplias de empleados y profesionales. Venezuela presenta por lo tanto una sociedad con una urbanización muy rápida –el 80% de sus habitantes vive actualmente en las ciudades– y carece de una sindicalización poderosa; el sector petrolero es numéricamente ínfimo, pero económicamente privilegiado.

Esta situación contrasta marcadamente con los principales sectores exportadores de otros países del continente –Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile– cuyas clases obreras poseen grados de concentración cuantitativa, combatividad y conciencia de clase, de los que carecen básicamente en Venezuela. Como dato significativo, los sondeos de opinión demuestran que solamente un 4% de la población venezolana se autodescribe como “obrero”, un 6% como “clase baja”, un 25% como “pobre” y alrededor de un 57% como “clase media”. Por lo tanto, las clases trabajadoras –en este sentido, la clase obrera– constituye una presencia modesta y pacata en la vida nacional, integrada corporativamente en la maquinaria del partido Acción Democrática, aunque con un rol muy pasivo dentro del partido, liderado esencialmente por cuadros de la clase media.

Sintetizando estas reflexiones, es la falta de una clase hacendada fuerte lo que determina la ausencia de una oligarquía agraria clásica, la cual, junto con la carencia de una clase obrera fuerte, determinó la ausencia de un movimiento sindical poderoso –no digamos socialista– que ha sido la fórmula sociológica para la estabilización de la democracia burguesa, basada esencialmente en las clases medias que existen entre ambas.



Miremos ahora hacia el **Cono Sur**. Allí encontramos las peores dictaduras de la década del '70, aunque históricamente en esas regiones se hayan dado las sociedades más avanzadas del continente.

**¿Cómo explicar esta configuración?** Mi hipótesis es la siguiente: la clave para entenderla es una correlación de fuerzas sociales básicas, diametralmente opuestas a la venezolana, es decir, una combinación de clases terratenientes tradicionalmente fuertes, con movimientos obreros tradicionalmente fuertes también. Claro que los tres casos no pueden ser automáticamente asimilados, pero hay rasgos comunes en este sentido. Es decir, la fuente principal de riqueza nacional –la acumulación de capital– en Argentina y Uruguay ha sido siempre agraria y en ambos casos se fueron aglutinando sucesivas empresas financieras y actividades industriales alrededor de un núcleo original de capital agropecuario.

Las inversiones rurales irían diversificándose y amalgamándose en las diversas inversiones de empresarios urbanos e industriales propios. El sector bancario es el puente normal entre ambos tipos de inversión, capitalizando fortunas agrarias en operaciones de intermediación y especulación. Todo este proceso ocurrió durante una época de urbanización masiva y ascenso de una clase media numerosa y muy activa. Sin embargo, aún después de la Segunda Guerra Mundial, grupos terratenientes de gran tradición, tenaces y poderosos, siguieron ejerciendo una muy importante influencia en el bloque de poder de cada sociedad. Hay varias razones, tanto materiales como culturales para esto, pero el factor más importante fue el peso absolutamente dominante en el paquete de las exportaciones argentinas y uruguayas del eje de la agricultura. La carne y el trigo han

seguido siendo las mercancías dominantes.

Chile es distinto, porque allá el cobre ha sido el principal producto exportador, inicialmente controlado por el capital extranjero y luego por el Estado. Y allí también la reforma agraria de la democracia cristiana disminuyó notablemente el peso del gran propietario rural en el bloque dominante. En este sentido, las exportaciones chilenas han sido mucho más diversificadas, pero, aun así, es significativo que el modelo económico del régimen de Pinochet haya dado tanta importancia a la reconversión, precisamente de una agricultura exportadora. El principal –casi el único– éxito entre 1976 y 1980 ha sido la promoción de la fruta, legumbres, vinos, etc. generada por un “agro business” modernizado chileno.

Al mismo tiempo, el capital agraria en estos tres países también enfrentaba tradicionalmente movimientos obreros poderosos, organizaciones sindicales o partidarias, como el peronismo en la Argentina, los partidos socialista y comunista en Chile y más tarde la CGT en el Uruguay, instalados en los sectores clave de la economía, vg. Transportes, operaciones portuarias e industrias de transformación, en frigoríficos o en la minería. En estos tres casos las clases obreras en cuestión han mostrado históricamente altos grados de combatividad, conciencia, concentración y organización colectiva.

Ahora bien, esta fórmula de la democracia venezolana no niega la presencia de clases medias importantísimas en el Cono Sur, también históricamente muy significativas en el pasado (pienso en el radicalismo, en el batllismo y en la democracia cristiana, en su tiempo, en Chile). Sólo sugiero que después de la coexistencia, el enfrentamiento entre estas dos fuerzas fundamentales -terratenientes y obreros– ha sido estructuralmente decisivo para el advenimiento de las dictaduras militares.

Pasemos primero al caso del Brasil. Allá también, el sector exportador –después de la Segunda Guerra Mundial– seguía dominado por la agricultura (en 1945, el café representaba el 60% de las exportaciones, y en 1960 todavía estaba en alrededor del 40%). Sin embargo, en Brasil el mercado interno fue siempre mucho mayor y el capital industrial mucho más central para la economía en su conjunto que en el Cono Sur.

Este capital industrial brasileño tuvo sus orígenes en la riqueza de las plantaciones, pero, hacia la

década del '50, era más autónomo de sus orígenes agrarios que en cualquier otro país. En este sentido, el peso del capital agrario en la sociedad brasileña, en términos estrictamente económicos, fue mucho menor que en Argentina o en Uruguay, por ejemplo. Pero, en compensación, se produjo en Brasil un fenómeno que no se dio en el mismo grado en el Río de la Plata: un electorado político cautivo –en el nordeste del país– de los terratenientes tradicionales de regiones de producción rural en decadencia. Este rasgo de caciquismo rural contribuyó a estabilizar el orden constitucional después de la Segunda Guerra Mundial, contrariamente a lo que ocurrió con la agricultura extensiva argentina y uruguaya, con muy poca mano de obra y donde, a mediados del siglo XX, los terratenientes carecían de correas de transmisión con el electorado popular.

El predominio de la actividad exportadora en el sudeste del país, junto con el control electoral en la región del noroeste, contribuyeron en Brasil una variante más compleja de lo que puede ser todavía definido como un frente agrario. Por otro lado, la clase obrera brasileña era mucho más débil que sus equivalentes en el Cono Sur después de 1945. El Partido Comunista, inicialmente muy dinámico, sufrió una represión bastante efectiva en los dos primeros años después de la guerra. En ningún momento hubo un partido socialista de masas, y el getulismo –tanto en los sindicatos como en el Partido Trabalhista– fue siempre un pálido reflejo del peronismo y mucho más frágil como legado organizativo e ideológico.

Sin embargo, precisamente debido a que el crecimiento industrial brasileño fue tanto más rápido que en los demás países, el proletariado industrial incrementó su tamaño e importancia estructural a un ritmo superior al de sus equivalentes en el Cono Sur a partir de la década del '50. Por lo tanto, también allí su potencial político estaba creciendo, mostrando una clase, un grado de militancia y eficacia cada vez mayor a partir del segundo período presidencial de Vargas. La clase obrera brasileña, que no había sido históricamente fuerte, se fortaleció rápidamente en esos años.

En resumen, el carácter de las dos clases, las dos fuerzas sociales básicas, fue en el Brasil relativamente diferente, aunque dentro de parámetros semejantes, conduciendo en este caso a una dictadura que también sería algo distinta.

Para completar el cuadro, mencionaré brevemente las otras dos combinaciones posibles para mostrar la lógica de mi exposición, implicadas en mi hipótesis inicial. **Ya hemos visto la combinación de terratenientes débiles** y obreros débiles –que es la fórmula de la democracia venezolana– y **la de terratenientes fuertes y movimientos obreros fuertes** –que es la formación que desencadenó las recientes dictaduras militares en el Cono Sur y en Brasil.

**¿Qué sucedería si se diera una clase terrateniente fuerte con un movimiento obrero débil?** Yo diría que ésa sería la fórmula de una democracia restringida, o sea el caso aproximado de **Colombia**, donde dos partidos oligárquicos –los liberales y los conservadores– coexisten desde el siglo XIX en una continuidad absolutamente única en América Latina. Ellos enfrentan un movimiento sindical muy pequeño, muy dividido, y una izquierda política también marginal. El resultado fue la cohabitación excluyente de liberales y conservadores monopolizando el poder y dejando muy poca libertad de elección de participación, pero, al mismo tiempo, con ciertas libertades cívicas y elecciones no fraudulentas en las décadas del '70 y del '80.

Finalmente, queda el caso lógicamente opuesto al precedente. Es el caso de **Bolivia**, donde durante ese período existió el movimiento obrero históricamente más fuerte de todo el continente, basado en las minas de estaño; una clase que había hecho la revolución del '52 y casi destruido el ejército boliviano; una clase en un estado de insurgencia constante en los años siguientes. Al mismo tiempo, durante unos veinte años, Bolivia tuvo la clase terrateniente más débil del continente, después de la reforma agraria del MNR. Eventualmente, hubo una reconstrucción del sector de las plantaciones de azúcar y algodón en el este del país, pero hasta la actualidad se puede decir que la correlación muy específica de fuerzas en Bolivia ha generado una suerte de volcán político permanente, en la medida en que el ejército boliviano, un aparato militar sin base social orgánica, trataba de contener una dinámica laboral que constantemente amenazaba transgredir los límites del modo de producción capitalista. Por lo tanto, las dictaduras militares resultantes han sido de un tipo muy esporádico e inestable, que difiere considerablemente del tipo de dictadura militar que se dio en el Cono Sur, así como del tipo colombiano de democracia restringida.

Claro que esta hipótesis es muy esquemática. No he analizado el capital industrial ni el financiero, a pesar de su innegable gravitación específica; tampoco he mencionado el campesinado, factor fundamental en el fracaso, en la no realización de una revolución social en Bolivia después de 1952; no he mencionado, tampoco, la pequeña burguesía ni el sub-proletariado. Todas estas clases deberían ser estudiadas en su especificidad para llegar a lo que Marx llama “la multiplicidad de lo concreto”, pero el conocimiento científico siempre avanza a través de abstracciones simplificantes en su movimiento hacia lo concreto. Sólo me propongo afirmar que probablemente se requiera algún tipo de análisis comparativo de clase para entender el mapa diferencial de los regímenes políticos de América del Sur. Mi conclusión –provisoria– es incómoda: todo pasa, diríamos, como si las condiciones clave para la democracia en estos años exigiera un movimiento obrero débil.

Venezuela y Colombia constituyen variantes de este modelo: una democracia plena o una democracia restringida. Claro que esta conclusión es exactamente lo opuesto de la sabiduría convencional de la izquierda, por ejemplo en Europa, donde suele presentarse a la democracia representativa como una conquista del movimiento obrero.

Permítanme ahora pasar a la segunda pregunta: **¿Cuál ha sido, no la fórmula sociológica que originó las dictaduras militares de la década del '70, sino su proyecto histórico y su realización (su efectos, sus resultados)**

**histórica?** Porque, claro, en el pasado latinoamericano ha habido muchas juntas, muchos generales, en el poder. Pero en la década del '70 había una sensación muy difundida y –creo– justificada de que los regímenes de esta década representaban algo nuevo.

Pero, **¿cuáles han sido efectivamente los rasgos “nuevos” del dominio pretoriano?** Considero que, para entenderlos, es necesario considerar con mayor detenimiento la coyuntura económica y política de los años '60 y '70. Hasta ahora he hablado de estructuras sociales de manera completamente abstracta, fuera del tiempo. Pero en la realidad de tales estructuras jamás existen como hechos estáticos y aislados. Su significado y su constelación están siempre sujetos a la evolución del tiempo histórico.

## ¿Qué ha sido, exactamente, lo que ha precipitado las nuevas dictaduras militares sobre la base de la correlación de clases que he descrito?

Esencialmente, a mi parecer, lo que denominaré “la inflexión populista”. Los orígenes del populismo latinoamericano son bien conocidos: una vez que comienza a desarrollarse un cierto grado de industrialización –por muy modesta que ésta sea al principio– bajo la corteza oligárquica tradicional empiezan a originarse presiones populares urbanas. Pero, así como el liberalismo latinoamericano del siglo pasado defería del liberalismo europeo en su carencia de un parlamentarismo censitario auténtico, el impulso populista para ampliar el marco del Estado en el siglo XX tampoco logró desembocar rápidamente en una democracia representativa genuina del tipo que siguió el orden liberal del siglo pasado en Europa. Más bien, el resultado generalizado a partir de la depresión ha sido el establecimiento de regímenes populistas que desviaron las formas parlamentarias hacia las dictaduras plebiscitarias. Los casos más famosos son, claro, los de Vargas y Perón. Estos fueron regímenes que promovieron reformas materiales elementales para las masas urbanas, buscando al mismo tiempo acelerar el desarrollo económico nacional, sobre todo en la industria, sin asegurar libertades cívicas en una vida constitucional efectiva. El populismo, por decirlo así, negó principios liberales sin afirmar principios democráticos. Sin embargo, este populismo ha dotado típicamente a los sectores laborales de América Latina de una nueva identidad y memoria política que, como hemos podido comprobar, resultó muy duradera y frecuentemente, capaz de generar mayorías electorales, a pesar de haber menospreciado a las instituciones parlamentarias, cada vez que se celebraban elecciones libres, como ocurrió en la Argentina después de la década del '50.

 Ahora bien, es importante subrayar que la mayoría de estos regímenes populistas tuvieron un origen o un contexto militar, si pensamos en la figura de Perón aquí, Vargas y los militares del “Estado Novo” en Brasil, y el propio MNR en Bolivia, con sus coroneles Toro y Busch en los años '40. Las fuerzas armadas han sido los padres –o los padrinos, se puede decir– del populismo latinoamericano en sus comienzos. Pero, a medida que el proceso populista se iba desarrollando y

ganaba en autonomía, crecía la inquietud de sus promotores originales, y ello por dos razones: por un lado, la fuerza de las masas organizadas por el populismo adquiría cada vez mayor peso con el avance de la industrialización y, por el otro lado –y al mismo tiempo–, las presiones distribucionistas sobre los modelos de acumulación de capital local iban incrementándose, conduciendo eventualmente a una inflación galopante sin precedentes, en tanto las políticas de sustitución de importaciones en particular habían agotado su potencial previo. El resultado fue un nivel de desorden y tensión económica cada vez más intolerable para todas las clases sociales: hiperinflación en Argentina y Brasil, estancamiento en Uruguay y Chile.

Pero, más o menos en el mismo momento en que se entraba en este atolladero económico –a comienzos de la década del '60– se produce una radicalización política de los elementos más activos de las antiguas coaliciones populistas, una radicalización hacia algo también totalmente nuevo, o sea un socialismo revolucionario incipiente. Aquí es imposible subestimar el impacto de la revolución cubana en la región, que transformó las coordenadas de la política latinoamericana de la década del '60 tan profundamente como la revolución rusa lo había hecho con la política europea en la década del '20. Paradójicamente, dos rasgos del populismo contribuyeron a esta evolución: primero, su falta total de una ideología precisa, lo amorfo del populismo, su ausencia de fronteras doctrinarias nítidas, que siempre lo dejan proclive a transvaloraciones subjetivamente socialistas; en segundo lugar, su falta de respeto por las instituciones parlamentarias de una democracia capitalista; esto también debe haberlo expuesto a una transvaloración de tipo revolucionario. Aquí hay un contraste muy marcado entre el populismo latinoamericano y la social-democracia de Europa Occidental.

Claro que el impacto de la revolución cubana no se circunscribió al populismo de estos años, sino que también se hizo sentir muy rápidamente en el área del comunismo del continente y, también, del socialismo de la izquierda. En el plano político, el resultado fue la emergencia, aquí en Argentina, digamos, del ala montonera del peronismo, de los tupamaros, provenientes del antiguo Partido Socialista en Uruguay, la radicalización del Partido Socialista y la emergencia del MIR en Chile, el rápido crecimiento del Partido Comunista dentro del sindicalismo brasileño y también un deslizamiento del travalhismo hacia la izquierda, si se piensa en la secuencia Vargas-Goulart-Brizola.

Este es el proceso que he denominado **“la inflexión populista”** hacia algo mucho más radical.

Pero también es necesario subrayar que esta inflexión no comportaba solamente una radicalización

ideológica, sino también un aumento de fuerzas objetivas organizadas, vale decir, un grado superior de combatividad de las masas populares del continente, expresado en su tiempo en el Cordobazo en Argentina, la victoria de la Unidad Popular en Chile, la formación tardía de la CGT en el Uruguay, junto con la emergencia del Frente Amplio y, en Brasil, la aparición también tardía de la Confederación Nacional de Trabajadores en los años '60. En otras palabras, una dinámica inesperada y ominosa se desarrollaba en el continente que ahora amenazaba a las clases poseedoras de estos países con –al menos a sus ojos– el colapso económico y la expropiación social.

Tal fue, creo, el contexto de las intervenciones militares violentas en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, en las décadas del '60 y del '70. ¿Cuál fue su significado? Todas ellas fueron contrarrevoluciones preventivas cuya misión primordial fue la de decapitar y eliminar a una izquierda que no se resignaba al modo de producción capitalista, sino que apuntaba directamente a un socialismo que lo trascendía.

Su función esencial, primordial, pues, fue la de traumatizar a la sociedad civil en su conjunto con una dosis de terror suficiente para asegurarse de que no habría ninguna tentación ulterior de reincidir en desafíos revolucionarios contra el orden social vigente; para romper cualquier aspiración o idea de un cambio social cualitativo desde abajo; para eliminar permanentemente, en suma, el socialismo de la agenda política nacional.

Al mismo tiempo, su vocación secundaria fue la de restaurar las condiciones de una acumulación viable, disciplinando la mano de obra con represión, bajos salarios y deflación, promoviendo al mismo tiempo la capacidad exportadora y asegurando nuevos niveles de inversión externa, para que pudiera desarrollarse el crecimiento sin interrupciones redistributivas o escasez de capitales: esa fue la idea.

El programa económico de las dictaduras, su intento económico, fue detener el populismo y eliminarlo, en la medida de lo posible, de la agenda política en sus formas mayoritarias pre-socialistas.

👉 Ahora bien, si tal ha sido el contexto coyuntural y la misión histórica de las dictaduras militares, ¿en qué consiste, entonces, su novedad histórica? Porque, como ya he dicho, han existido muchísimos regímenes pretorianos represivos y dictadores militares en el pasado del continente. ¿Cuál ha sido la diferencia en estos casos? Básicamente, diría –y paradójicamente– la novedad consiste en que estos regímenes programaron una reintroducción de una democracia capitalista controlada, al fin de su obra de “reconstrucción”.

◆ Los tipos anteriores de regímenes militares en esta área fueron básicamente dos: **las autocracias patrimoniales** del tipo de Trujillo o de Stroessner, es decir, gobiernos de caudillos de origen militar en sociedades muy atrasadas donde la vida política popular no había todavía realmente emergido y el concepto de democracia ni siquiera figuraba en la agenda política nacional, y los **regímenes populistas militares de los años '30 y '40**, regímenes –es importante subrayarlo– franca y cándidamente antidemocráticos, a menudo muy atraídos por el fascismo europeo. Ahora bien, ninguna de estas **dos opciones** –particularmente la segunda– estuvo disponible para los generales de los años '60 y '70 porque, después de la Segunda Guerra Mundial, la coyuntura internacional era distinta. El fascismo ahora estaba desacreditado en el mundo metropolitano; su modelo ya no podría admitirse ni aceptarse como lo había sido en Bolivia y Argentina en los años '40. Según el capitalismo avanzado, que ahora se auto-legitimaba contra el socialismo y el comunismo, precisamente en cuanto orden democrático, desde los años '50 en adelante, el lema organizador fue la noción de mundo libre y ya no tanto la de empresa privada.

◆ En **tercer lugar**, los militares latinoamericanos, luchando –según lo entendían– contra el comunismo y el socialismo en sus propios países, no podían evitar una cierta

identificación ideológica con su protector norteamericano. Las buenas relaciones con Washington, dentro de ciertos límites, han sido una exigencia objetiva para ellos, desde la época de Kennedy en adelante.

◆ En **cuarto lugar**, había también en el oficialato sudamericano una cierta agresión, confusa y subjetiva, respecto de sus ideas sobre lo que debería ser un orden democrático. Aquí debemos recordar siempre la dependencia cultural ideológica tradicional de las élites latinoamericanas, pues –como ya hemos visto– el fascismo estaba de moda en la época del joven Perón; la democracia era casi obligatoria en los años de Kennedy, Johnson o Nixon. De allí que el proyecto a largo plazo de los nuevos regímenes consistiera no solamente en golpear y eliminar el peligro político de la socialización, sino además en transformar las estructuras socioeconómicas de sus países, para que una democracia capitalista estabilizada y controlada pudiera –al fin de cuentas– provenir de ellos. Aquí los generales contaban ya con un modelo ilustre en España: los orígenes de la dictadura franquista, en el levantamiento del '36, fueron de una sorprendente similitud, aunque más dramáticos; es decir, una contrarrevolución preventiva para aplastar un movimiento popular que se negaba a resignarse al orden social entonces imperante en España y que tumultuosamente amenazaba al orden capitalista español. A esto siguió una contrarrevolución que ha traumatizado a la sociedad civil en su conjunto, con una escalada masiva de matanzas durante la propia guerra civil y masacres sin freno después de ella.

Pero, en una segunda etapa, esta contrarrevolución precedió a promover una industrialización y modernización muy rápida del país, con la creación de nuevas clases medias y una nueva clase obrera. Después podría establecerse una democracia parlamentaria pacífica y más o menos dócil, como resultante de la experiencia.

Es interesante comparar, a este respecto, **la España de Largo Caballero** con la **España de Felipe González**, cincuenta años más tarde. Hoy en día, el mismo partido –el PSOE– ni siquiera pretende la implantación de una república (para no hablar de socialismo) y exhibe la tasa más alta de desempleo de toda Europa occidental. Lo que esto representa, creo, es la victoria histórica profunda de la llamada Cruzada Nacionalista en la Guerra Civil que, al fin de cuentas, ha transformado a sus

antiguos adversarios en sus agentes póstumos.

El efecto de la dictadura franquista fue entonces el de demorar y domesticar la entrada en el orden político de lo que alguna vez habían sido las clases peligrosas.

Básicamente, las dictaduras latinoamericanas se propusieron reiterar este tipo de experiencia, y con la misma combinación de medidas: traumatización subjetiva y transformación objetiva de la sociedad.

La gran diferencia entre estos dos tipos de experiencias fue que el régimen de Franco pudo evolucionar muy despacio, a un ritmo lento, desde su entrada fascista hasta su salida parlamentaria; a un ritmo que permitió su adaptación paulatina, a lo largo de cuarenta años, a los imperativos cambiantes del capitalismo internacional. Los generales sudamericanos vinieron más tarde y tuvieron desde el comienzo más conciencia de sus métodos que Franco, si bien no de manera uniforme. De ellos, los brasileños fueron los más lúcidos y coherentes, pues proclamaron desde un comienzo la restauración democrática –en el doble sentido de la expresión– como su objetivo final. Desde los primeros días del golpe, en 1964, siempre dijeron “nuestro objetivo es restaurar la democracia” y, desde allí, controlaron todo el proceso mejor que los otros. Los generales uruguayos, en cambio, fueron siempre mucho más confusos e inciertos en su orientación, aunque tampoco se apartaron nunca de la meta de un constitucionalismo controlado y depurado después.

La Junta o Juntas argentinas siempre fueron, claro, las más renuentes al establecimiento de cualquier orden civil partidario y político, y, al fin de cuentas, no fue sino a través de una derrota militar externa (en Malvinas) que fueron derrocadas. Pero ellos también, cuando se produjo la crisis económica a comienzo de los años '80, empezaron a discutir el proyecto de una suerte de vuelta a los gobiernos civiles controlados por ellos.

Hoy, el mismo Pinochet anticipa su propio tipo de “normalización” de Chile para los años '90, normalización de un tipo tal que resultará, por lo menos, satisfactoria a los EE.UU. En el fondo, todos los regímenes hicieron una apuesta histórica, a saber, que –una vez completada su obra– un capitalismo inconstrastado valdría el precio de un parlamentarismo intimidado.

Para terminar, voy a volver a mi primera pregunta, a saber, si las juntas militares fueron o no un fracaso. La respuesta, hasta ahora, creo, tiene que ser un “no” matizado, porque su objetivo primario –según parece– se realizó. Cualesquiera hayan sido las circunstancias locales de su retirada final del palacio presidencial (que los generales brasileños lograron mucho más brillantemente que los uruguayos, y éstos, a su vez, mejor que los argentinos), su meta básica estaba asegurada. Hoy en día, el socialismo se ha transformado virtualmente en un término tabú en la política latinoamericana. Es notable, por ejemplo, que aún la fuerza de izquierda más nueva y menos atemorizada del área –el Partido Travhalista brasileño– no invoque seriamente el socialismo en su discurso público. Las relaciones de producción capitalista se volvieron mental y materialmente intocables por el momento, bajo la amenaza de una vuelta al terror militar si dichas relaciones llegasen a ser puestas en juego. El único país donde esto no ocurrió es, claro, Chile, donde los militares todavía no pueden permitirse la “civilización” del régimen. Allá, aun habrá que esperar a que las lecciones del sometimiento sean aprendidas y las clases “peligrosas” se vuelvan dóciles. Pero, en su conjunto –políticamente, podríamos decir– estas experiencias han sido exitosas respecto de su objetivo final. Su mensaje a las clases populares ha sido éste: “Pueden tener democracia si respetan el capitalismo, pero, si no lo aceptan, se quedarán sin democracia y tendrán que seguir aceptándolo de todos modos”.

Este mensaje ha sido escuchado. El primero en entenderlo –y de buen comienzo– no fue un dirigente político latinoamericano, sino del sur de Europa, Enrico Berlinguer, quien, ya en 1974 - después del derrocamiento de Allende en Chile– inauguró lo que más tarde se llamó “eurocomunismo” en un documento sobre la caída de la Unidad Popular en Chile, cuya tesis central consistía en que esos acontecimientos demostraban la necesidad de no dividir nunca la sociedad

verticalmente en dos partes, porque cualquier proceso de radicalización de ese tipo conduciría fatalmente a otro bombardeo del Palacio de la Moneda. Su argumento es básicamente muy simple: el enemigo nos ha demostrado que, si realmente tratamos de avanzar hacia el socialismo –como lo hizo Allende– pagaremos un precio demasiado alto. Olvidémonos por lo tanto del socialismo y consolémonos con la democracia...

La conclusión que él extrajo de esto en Italia, claro, fue el proyecto del compromiso histórico con la Democracia Cristiana, en el que en realidad fueron los comunistas quienes suscribieran el compromiso y los demócratas cristianos quienes hicieron la historia.

Hace quince años eran pocos los representantes de la izquierda latinoamericana que estuvieran dispuestos a ratificar este compromiso. Hoy, en cambio, serían muy pocos los que no estuvieran dispuestos a hacerlo. La democracia capitalista estable es construida aquí sobre la derrota –y no sobre la victoria– de las clases populares.

Por otro lado, ninguno de los regímenes militares latinoamericanos ha logrado la escala de ingeniería social que inventó Franco en España. De hecho, las mezclas respectivas de dramatización política y transformación socioeconómica han variado ampliamente. El régimen argentino logró un máximo del primer elemento –el terror– y un mínimo del segundo –la modernización del país– mientras que los generales brasileños supieron combinar una medida mucho más limitada y vigilada del terror con una transformación mucho más profunda de su economía y sociedad. La experiencia uruguaya tuvo características más o menos intermedias entre ambos regímenes. Pero en todos los casos quedaron fuera de alcance los niveles de acumulación y consumo global alcanzados en España, de modo que las democracias sudamericanas de hoy se encuentran abrumadas por un régimen de miseria, profundas desigualdades y deudas enormes, distinguiéndose así de sus homólogas del sur de Europa.

En estas circunstancias, es poco probable que el mero crecimiento económico permita contener, por sí mismo, las exigencias y previsiones populares por una mejora en sus condiciones de vida. Tal vez se pueda decir que la revolución ha sido exorcizada, pero la redistribución en cuanto aspiración va a persistir y podría reaparecer en condiciones explosivas y desestabilizantes.

En suma, es probable que el populismo –o, en fin de cuentas– el comunismo latinoamericano sobreviva en alguna de sus variantes hacia el socialismo. Y es muy difícil de prever cómo las nuevas democracias van a poder enfrentar un nuevo brote de populismo cuando éste sobrevenga, tal vez en la próxima década, ya que todavía no están en condiciones de encarar la experiencia española.

[1] Conferencia dictada por el **Dr. Perry Anderson** en la Carrera de Sociología el 16 de octubre de 1987 reproducida en Cuadernos de Sociología N° 2, Carrera de Sociología, UBA, 1988.



## ACTIVIDAD 1

Leer la “Carta a las Juntas” de Rodolfo Walsh<sup>(5)</sup> que no fue publicada por ningún medio nacional y se difundió a través de medios escritos extranjeros y la solicitada de ADEBA que apareció en los principales diarios del país a un año del golpe de Estado.

Teniendo en cuenta estos documentos:

1. Realice una reflexión acerca de estos dos textos (comparándolos, ya que fueron escritos el mismo día) . Tome en cuenta la bibliografía de la cátedra.

- **CARTA ABIERTA DE RODOLFO WALSH A LA JUNTA MILITAR**
- **Solicitada**

(5) Walsh, Rodolfo (1927-1977), narrador, cronista y dramaturgo argentino, nacido en la provincia de Río Negro. Ejerció el periodismo y figura entre los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976-1983, presidida sucesivamente por Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, aunque sí se tiene constancia de su muerte, ocurrida el 25 de abril de 1977, cuando un pelotón especializado pretendió detenerlo en plena calle de Buenos Aires. Él se resistió e hirió a uno de sus agresores que le mataron allí mismo, aunque su cuerpo nunca ha aparecido.

La obra de Walsh abarca diversos géneros en los cuales se advierte un común interés por la denuncia social y la investigación de casos escandalosos y criminales de la vida política y sindical de su país, siempre en relación con diversos matices del realismo social y psicológico.

---

### Carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar

---



Junta Militar Marzo de 1976

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Illegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

## **2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.**

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.<sup>1</sup>

Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de

antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos.

El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el soplete de las actualizaciones contemporáneas.<sup>2</sup>

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

**3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.**

Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del

Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos.<sup>3</sup>

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.

Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.<sup>4</sup>

El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política

misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

**4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.**<sup>5</sup>

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.<sup>6</sup>

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre "violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.<sup>8</sup>

La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior

gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmor Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay.<sup>9</sup>

La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de "Prensa Libre" Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales.

A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal".<sup>10</sup>

**5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.**

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar<sup>11</sup>, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%<sup>12</sup> prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.<sup>13</sup>

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda ineptia.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.

**6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.**

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos".<sup>14</sup>

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo

las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.

**Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022**

**Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.**

1 Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de "liberados" que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.

2 El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: "Picana en los brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca cada vez que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba".

3 "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.

4 Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este último había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga"

5 En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios. 100. Total: 4.000.

6 Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.

7 "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.

8 El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió que "el terrorismo de derecha no es tal" sino "un anticuerpo".

9 El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy, lo acusó de "simular" su secuestro.

10 Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.

11 Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.

12 Diario "Clarín".

13 Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.

14 Prensa Libre, 16-12-76.

## SOLICITADA ADEBA

### Solicitada

#### Un año después...

El pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976 significó, ante todo, la inevitable asunción del poder por un gobierno con autoridad. Además, implicó una convocatoria a las fuerzas sanas del país para rescatarlo del caos en que se encontraba. ADEBA, Asociación de Bancos de capital y dirección argentinos, reitera hoy su adhesión a los principios de moralización, reconstrucción y recuperación de nuestros valores nacionales que inspiraron aquel movimiento.

Sin perjuicio de que las empresas humanas son siempre perfectibles, nuestra convicción de que el país ha tomado el buen camino es inquebrantable. Algunas objeciones con carácter de autocrítica pueden ayudar a adecuar, rectificar o intensificar los programas trazados, según lo exija la evolución del proceso. Otros no quieren ver que existe siempre un costo para cualquier meta a la que se quiere llegar. Que todos los objetivos no pueden alcanzarse plena y simultáneamente. Que si se quieren los fines hay que querer los medios conducentes a ellos.

Frente a la magnitud del daño que se había inferido a las instituciones, a la economía y, más grave aún, a las conciencias, pues se había llegado a confundir y corromper ideológicamente a parte de nuestra juventud, la ruta emprendida ha de ser necesariamente larga y difícil. Sobre la marcha, surgen obstáculos impredecibles o atrasos inesperados.

En el área económica, en la cual se desarrolla nuestra actividad profesional, nos encontrábamos:

- 1) Al borde del estado de cesación de pagos internacionales.

2) La inflación había alcanzado el nivel previo a la inminente destrucción de nuestro sistema monetario y financiero.

3) La vida económica se desenvolvía bajo el signo del desabastecimiento y el mercado negro.

Aquella situación aparece hoy totalmente superada en cada uno de esos sectores críticos.

Por otra parte, deben destacarse las realizaciones del Gobierno en el campo de los cambios estructurales. Nos incumben específicamente algunos que, a nuestro juicio, van construyendo el marco jurídico que hará posible e impulsará una gran transformación de nuestro sistema financiero que podrá así contribuir decisivamente al futuro progreso económico. Tal carácter tiene, por ejemplo, la ley de descentralización de los depósitos y la ley de entidades financieras.

adeba

**Asociación de Bancos de Argentina**

*El cronista comercial 24 de marzo de 1977*